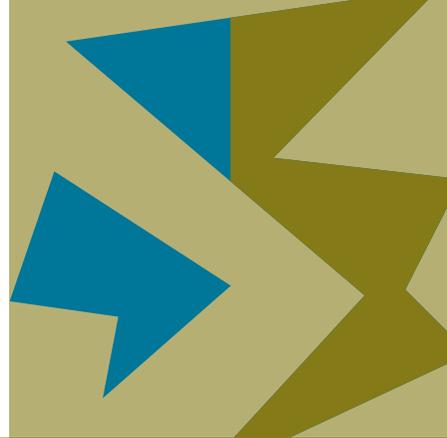


Esperando el cambio:

Tendencias de la asistencia en seguridad de EE.UU. para América Latina y el Caribe



Introducción

En toda América Latina, los gobiernos y el público recibieron la elección de Barack Obama con sorpresa y esperanza. Los presidentes hicieron fila ansiosamente para estrecharle la mano y compartir un breve momento de la historia en la Cumbre de las Américas en Trinidad, en abril de 2009, y muchos se atrevieron a soñar con el comienzo de una nueva relación con la región. Las palabras del presidente Obama en la cumbre ayudaron a infundir esperanza:

Sé que las promesas de asociación no han sido realizadas en el pasado, y esa confianza hay que ganarla con el tiempo. Si bien Estados Unidos ha hecho mucho por promover la paz y la prosperidad en el hemisferio, hemos estado a veces desconectados, y en ocasiones hemos tratado de dictar nuestras condiciones. Pero les prometo a ustedes que estamos buscando una asociación entre iguales. No hay socios superiores o inferiores en nuestras relaciones; hay simplemente un compromiso basado en el respeto mutuo e intereses comunes y valores compartidos. Así que estoy aquí para lanzar un nuevo capítulo de compromiso que se mantendrá a lo largo de mi administración.¹

Un año después, esas expectativas poco realistas se han atenuado bastante. La puesta en marcha de un importante acuerdo sobre bases militares con Colombia pareció indicar que la administración de Obama estaba profundizando en vez de reduciendo gradualmente la impronta militar de EE.UU. en la región. La débil respuesta de la administración al golpe de Estado en Honduras, a pesar de que la Organización de Estados Americanos formó un frente unido contra éste, desechó las esperanzas de un mayor compromiso de EE.UU. hacia la democracia en la región. La negativa a implementar los

condicionamientos legislativos en torno a la ayuda militar para Colombia y México les dio a entender a los grupos de derechos humanos que Estados Unidos seguiría haciendo la vista gorda a los abusos de sus aliados más cercanos. A comienzos de 2010, sin embargo, la oportunidad de responder generosamente al terremoto en Haití ofreció a Estados Unidos una abertura a percepciones cambiantes.

Los quince años que llevamos documentando las tendencias de las relaciones militares de EE.UU. con América Latina a través de administraciones demócratas y republicanas, nos han convencido de que la relación estructural subyacente sólo se ve afectada en un grado limitado por el gobernante de turno de la Casa Blanca. También nos ha convencido de que existe una creciente tendencia hacia la militarización de la política exterior de EE.UU. hacia la región que trasciende las diferentes administraciones. A pesar de esta realidad, estamos decepcionados que el gobierno de Obama no ha tomado acciones fuertes e identificables para mejorar las relaciones con América Latina.

El acuerdo con Colombia ensombrece el mensaje de “cambio” del nuevo presidente

La buena voluntad regional hacia la nueva administración de Obama comenzó a erosionarse a mediados de 2009, cuando medios de prensa revelaron que los Estados Unidos y Colombia estaban negociando en secreto un acuerdo para aumentar el acceso de personal militar de EE.UU. a siete bases militares colombianas. Mientras que el presidente venezolano Hugo Chávez se quejó en voz alta, el Acuerdo de Cooperación para la Defensa entre EE.UU. y Colombia generó también una protesta de líderes bastante más moderados, y contribuyó a la sensación de que poco había cambiado tras la salida de la administración de Bush.

Por Lisa Haugaard, Adam Isacson, George Withers, Abigail Poe, Joy Olson, Lucila Santos y Colin Smith

Resumen ejecutivo

El mensaje de cambio de Barack Obama resonó en América Latina suscitando la esperanza de una nueva relación entre Estados Unidos y América Latina. Hoy, sin embargo, la esperanza se ha atenuado. La puesta en marcha de un importante acuerdo sobre bases militares con Colombia dio la impresión de que la administración de Obama está aumentando en lugar de reduciendo gradualmente la impronta militar de EE.UU. en la región. La débil respuesta de la administración al golpe de Estado en Honduras, a pesar de que la Organización de Estados Americanos formó un frente unido contra éste, desechó las esperanzas de un mayor compromiso de EE.UU. hacia la democracia en la región. La negativa a implementar los condicionamientos legislativos en torno a la ayuda militar para Colombia y México dio a entender a los grupos de derechos humanos que Estados Unidos seguiría haciendo la vista gorda a los abusos de sus aliados más cercanos. La promesa inicial para cerrar la prisión de Guantánamo se enfrascó en un debate jurídico y político complicado. La ayuda y la política económica no parecen estar adoptando un nuevo curso con respecto a la administración de Bush, mientras que la reforma migratoria que había adoptado Obama como candidato se quedó fuera de la agenda. A medida que el segundo año del Presidente Obama toma su curso, el segundo presupuesto del gobierno propone cambios modestos al recortar los programas antinarcóticos más duros que se implementan en América Latina y al aumentar levemente los programas de tratamiento de drogas en Estados Unidos. Estas nuevas tendencias sumadas a la respuesta al terremoto de Haití ofrecen algunas ventanas de oportunidad para el cambio.

Este informe documenta las complejidades y decepciones de las relaciones de la administración de Obama con América Latina en su primer año, con un enfoque particular en las relaciones militares con la región. El informe reconoce que hay una tendencia subyacente hacia una militarización mayor en la política exterior de EE.UU. que tiene continuidad entre las administraciones demócratas y republicanas. Pero no hay razón para que esto sea así. No es demasiado tarde para que la administración de Obama impulse un nuevo rumbo en las relaciones entre EE.UU. y América Latina, pero para hacerlo deben empezar a tomarse medidas firmes.

Para cumplir con las promesas de esperanza y cambio, la administración debería:

- Asignar un generoso **paquete asistencial de largo plazo** para reconstruir Haití, **liderado por los haitianos y por las autoridades civiles** de ese país.
- Demostrar que los Estados Unidos **se preocupan por la protección de los derechos humanos en los países percibidos como socios cercanos**, como Colombia y México, así como en el resto de la región.
- **Mantener suspendida la asistencia militar y condicionar toda otra asistencia a Honduras hasta que verdaderos pasos sean tomados para lograr justicia por los abusos a los derechos humanos**, establecer la rendición de cuentas por el golpe de estado, proteger a los defensores de derechos humanos y a otros que aun estén en peligro, remover a los militares de roles y posiciones inadecuados, y establecer un diálogo substantivo e inclusivo a lo largo y ancho de Honduras para construir una sociedad justa y democrática.
- Asegurar a los gobiernos de América Latina y al público **de que el principal actor y la principal voz en la política de EE.UU. hacia la región es el Departamento de Estado y las embajadas y no el Comando Sur** por medio de la transparencia de los convenios militares y la garantía de que Estados Unidos no está tratando de proyectar su poder militar en la región.
- Apoyar los esfuerzos de América Latina de adoptar **un enfoque más amplio sobre seguridad ciudadana**, el cual implica una reforma y medidas de lucha contra la corrupción de la policía, el funcionamiento de los sistemas judiciales, la supervisión ciudadana, y mayores oportunidades para jóvenes en riesgo.

- A través de la acción, no sólo de la retórica, **centrar los esfuerzos antinarcóticos dentro de los Estados Unidos**, incrementar el acceso al tratamiento de adicción de drogas y controlar el flujo de armas de asalto a México. Proporcionar una mayor flexibilidad a los gobiernos latinoamericanos para que exploren sus propios enfoques innovadores para este complejo problema.
- **Permitir el libre intercambio de personas e ideas con Cuba**. Nada podría restablecer mejor las relaciones con toda la región como el fin total a las arcaicas restricciones sobre viajes a Cuba.
- **Cambiar de manera más decisiva el balance de la ayuda** disminuyendo los gastos militares a favor de mayor asistencia a la salud, educación, ayuda en desastres naturales, fortalecimiento de la justicia, y el desarrollo a pequeña escala para mejorar el nivel de vida.
- **Poner la reforma migratoria de nuevo en la agenda** y avanzar con esto. Construir puentes en vez de muros, a través de la creación de un proceso para que los indocumentados obtengan estatus legal y eventualmente la ciudadanía, y se mantenga la defensa de la unidad familiar como una prioridad en nuestra política de inmigración. Esto ayudará inconmensurablemente a las familias y economías de EE.UU. y América Latina, y mejorará la imagen de EE.UU. en la región.

Esta historia tuvo sus inicios en 1999, cuando el personal militar de EE.UU., en cumplimiento con un tratado de 1977, se retiró de varias bases en Panamá. A fin de continuar con el control de sospechosos transbordos marítimos de drogas en las proximidades de Colombia, el gobierno de los EE.UU. firmó rápidamente acuerdos de diez años con tres gobiernos cercanos para permitir que aeronaves, personal militar y contratistas utilizaran las pistas y otras instalaciones. Estos “Centros Operativos de Avanzada” (también conocidos como “Centros de Seguridad Cooperativa”) operaban en virtud de acuerdos, limitándose a detectar y vigilar el tráfico aéreo y marítimo.

Como estos acuerdos expiraban en 2009, el gobierno de los EE.UU. negoció la renovación para el uso del campo de aviación de Comalapa en El Salvador y las instalaciones de Aruba y Curazao en las Antillas Neerlandesas. Uno de estos centros, sin embargo, no fue renovado: el Centro Operativo de Avanzada de Manta, Ecuador. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, cumplió la promesa hecha en su campaña presidencial de 2006, donde aseguró: “Prefiero cortarme un brazo...” antes de renovar el acuerdo de la base.² Los últimos militares estadounidenses abandonaron Manta en agosto de 2009.

Dos años antes del cierre de Manta, los funcionarios de EE.UU. estuvieron discretamente buscando alternativas. Los rumores en la prensa regional señalaban que había conversaciones con Perú para

el posible uso de una base en Piura,³ o sobre el interés de EE.UU. de usar la base aérea de la Fuerza Aérea Colombiana de Palanquero en Puerto Salgar, a unos 50 kilómetros al noroeste de Bogotá.⁴

En febrero de 2009, quedó claro que los rumores sobre Colombia eran correctos. El Ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, reconoció que ambos gobiernos estaban discutiendo una alternativa en Colombia para Manta. Estas conversaciones estaban teniendo lugar en el más absoluto secreto, aparentemente en respuesta a una solicitud del gobierno colombiano.

Las filtraciones vinieron, sin embargo, desde el lado colombiano. En julio de 2009, la revista colombiana *Cambio* reveló los primeros detalles del acuerdo.⁵ Cuando los negociadores de EE.UU. expresaron su interés en la instalación de Palanquero, según la publicación, el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe ofreció el acceso a seis bases más: una base aérea en Malambo, cerca de Barranquilla; las bases del Ejército en Tolemada, Tolima, y Larandía, y Tres Esquinas, Caquetá; y las bases navales de Cartagena y Buenaventura. Más allá del acceso a las bases, las conversaciones se convirtieron en una oportunidad para formalizar una serie de acuerdos de cooperación militar que los dos países venían negociando desde la década de 1950.

La noticia filtrada provocó el clamor de toda la región, y los presidentes de Brasil, Chile, Argentina

y Ecuador expresaron su preocupación por la invitación no consultada a los militares de EE.UU. en el continente sudamericano. Especialmente lamentable fue el efecto sobre las relaciones con Brasil, un país que la administración de Obama se había esforzado especialmente en cortejar a principios de 2009.

La respuesta más ruidosa provino, sin embargo, del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Aduciendo que el Acuerdo de Cooperación para la Defensa era evidencia de las intenciones de Estados Unidos de invadir Venezuela a través de Colombia, Chávez “suspendió” las relaciones con Bogotá, recortó fuertemente los 7 mil millones de dólares en comercio anual entre los dos países, cerró muchos cruces de frontera, y pidió a las fuerzas armadas venezolanas que “se prepararan para la guerra” con Colombia. Mientras que muchos analistas concluyeron que Chávez utilizó el acuerdo de las bases para distraer a la opinión pública interna de los problemas económicos (y por lo tanto, que el mal manejo del acuerdo con Colombia por parte de la administración de Obama fue un regalo político para el presidente venezolano) las tensiones entre Venezuela y Colombia se elevaron a niveles no vistos en años anteriores.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, cumplió la promesa hecha en su campaña presidencial de 2006, donde aseguró: “Prefiero cortarme un brazo” antes de renovar el acuerdo de la base.

EE.UU. y los funcionarios del gobierno colombiano firmaron el acuerdo a finales de octubre de 2009. El texto del acuerdo concede el acceso de EE.UU. a siete bases colombianas. El Congreso estadounidense no ratificó el acuerdo. Sin embargo, el Consejo de Estado del poder judicial colombiano entregó al poder Ejecutivo su concepto sobre el acuerdo militar—que no es vinculante—el 13 de octubre de 2009, estableciendo que el acuerdo tenía que ser revisado por el Congreso de Colombia y la Corte Suprema, ya que el acuerdo es “amplio y desequilibrado” en favor de los Estados Unidos y no se basa en un tratado anterior,⁶ entre otras razones. Más recientemente, la Corte Constitucional de Colombia ha decidido revisar el acuerdo. La Corte aceptó una demanda introducida por un grupo de derechos humanos que alega que el acuerdo militar debe anularse ya que no fue aprobado por

el Congreso como lo estipula la Constitución.⁷ La decisión está todavía pendiente.

El acuerdo estableció también una misión muy amplia e imprecisa para la futura cooperación en seguridad entre los dos países. El Artículo III, Sección 1 permite a las fuerzas de EE.UU. apoyar actividades “para enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”. Este texto podría ser interpretado como una garantía de defensa de EE.UU. contra una agresión externa, y de hecho puede haber sido escrito con Venezuela en mente.

El acuerdo, según insisten diplomáticos estadounidenses, no contempla ningún apoyo de los EE.UU. para operaciones militares más allá de las fronteras de Colombia.⁸ Este mensaje de “no intervención” se vio de inmediato afectado a principios de noviembre de 2009, cuando algunos medios de comunicación colombianos revelaron un documento que de hecho estaba disponible en Internet desde hacía varios meses.⁹ La solicitud de presupuesto de construcción militar de la Fuerza Aérea de EE.UU. ante el Congreso hablaba de la utilización de la base de Palanquero para “capacidad de guerra expedicionaria” y “operaciones de espectro completo en una subregión crítica de nuestro hemisferio, donde la seguridad y la estabilidad están bajo la constante amenaza de insurgencias terroristas financiadas por los narcóticos, gobiernos anti-estadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales.”¹⁰

Si bien este lenguaje fue editado posteriormente, la preocupación por los planes de EE.UU. en la región sigue siendo alta. Los presidentes Lula da Silva de Brasil y Kirchner de Argentina dieron a conocer ese mes un comunicado conjunto haciendo un llamado a “garantías formales de que tales acuerdos no serán utilizados contra la soberanía, la integridad territorial, la seguridad y la estabilidad de los países sudamericanos”.¹¹ A finales de 2009, la administración de Obama envió comunicaciones a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y a los líderes de las naciones sudamericanas dando nuevas garantías de no intervención.¹² Esto aparentemente bajó el tono de las quejas de los líderes regionales sobre el acuerdo, con excepción de Chávez en Venezuela.

En abril de 2010, el gobierno firmó otro Acuerdo de Cooperación para la Defensa con Brasil. Este documento, que es aun mucho más corto, sin embargo, se concentra principalmente en protocolos para futuras visitas de personal de los EE.UU., y casi no contiene ninguna similitud con el acuerdo

con Colombia: ningún tipo de acceso para EE.UU. a bases brasileñas, ningún tipo de presencia de tropas estadounidenses, ningún compromiso común de defensa, y ningún tipo de inmunidad para el personal de EE.UU.

El acuerdo con Colombia despertó también inquietudes por los derechos humanos. Las generosas garantías de inmunidad para el personal de EE.UU. en Colombia suscitaron la preocupación de que los delitos cometidos por personal estadounidense en suelo colombiano podrían quedar impunes. El personal de EE.UU. en las bases podría verse localizado y compartiendo instalaciones con unidades cuyos registros poco favorables en materia de derechos humanos los hacía jurídicamente no aptos para la asistencia de EE.UU. (Estos datos no son especulación: a mediados de la década de 2000, la Ley Leahy proscribió por varios años a la unidad de la fuerza aérea con base en Palanquero debido a su participación en un bombardeo indiscriminado en 1998 en Santo Domingo, Arauca).

Hay razones preocupantes por el incremento significativo de la asociación de EE.UU. con las fuerzas armadas colombianas en un momento en que esta institución ha sido sacudida por una serie de escándalos de violaciones a los derechos humanos, en especial, respecto a una ola de ejecuciones extrajudiciales que puede haber cobrado la vida de más de dos mil civiles desde 2002. Dado que Colombia le ha ofrecido a EE.UU. un arreglo militar tan generoso, ¿tendrá Washington ahora menos voluntad para condicionar la asistencia militar al comportamiento en derechos humanos de las fuerzas armadas colombianas, como lo requiere la ley de ayuda de EE.UU.?

Al momento de enviar esta publicación a la imprenta, las tensiones entre Colombia y Venezuela seguían siendo altas. Los Estados Unidos han comenzado a construir y renovar las instalaciones en la base de Palanquero. Y—quizás más irónico todavía—algunos funcionarios estadounidenses han reconocido ante los autores de este informe que, dado que todas las pistas aéreas de Colombia están del otro lado de los Andes con respecto al Océano Pacífico, los militares estadounidenses no cuentan aun con la capacidad que tenían en Manta, Ecuador, para vigilar el tráfico marítimo de drogas.

Existe un nuevo arreglo sobre bases militares, pero Manta no ha sido sustituida operacionalmente. Y la forma en que se manejó—sin transparencia, sin consultas, y con evidente arrogancia—perjudicó

considerablemente la aspiración del gobierno de Obama de “reiniciar” las relaciones con la región.

La Cuarta Flota: ¿algún parecido con la diplomacia de los cañones?

En abril de 2008, la Marina de EE.UU. restableció la Cuarta Flota de los EE.UU. después de 58 años de inactividad. De acuerdo con un comunicado de prensa de la Marina en ese momento, la IV Flota es “responsable de los barcos, aviones y submarinos de la Marina de EE.UU. que operan en el área de control del Comando Sur, que abarca el Caribe, América Central y América del Sur y las aguas de los alrededores”.¹³ En los años transcurridos, la Marina de los EE.UU. llevó a cabo operaciones militares marítimas, sobre todo ejercicios conjuntos con otras naciones de la región. El comandante del Comando Sur en el momento, el almirante James Stavridis, dijo que la decisión requeriría a los Estados Unidos “establecer asociaciones usando una amplia gama de actividades de cooperación en seguridad, incluyendo ejercicios militares, asistencia humanitaria, proyectos relacionados con la comunidad, y estudios profesionales y oportunidades de capacitación.”¹⁴

Dado que Colombia le ha ofrecido a EE.UU. un arreglo militar tan generoso, ¿tendrá Washington ahora menos voluntad para condicionar la asistencia militar al comportamiento en derechos humanos de las fuerzas armadas colombianas, como lo requiere la ley de ayuda de EE.UU.?

A principios de 2010, muchos barcos de la IV Flota, como complemento a la recién creada Fuerza de Tarea Conjunta Haití, fueron parte del importante esfuerzo para aliviar el sufrimiento tras el terremoto del 12 de enero.

Pero sigue habiendo confusión y preocupación en la región sobre por qué era necesario volver a establecer la IV Flota. Como el propio Almirante Stavridis afirmó: “hay cero buques destinados permanentemente a la IV Flota, y no hay ninguna intención de asignar permanentemente buques en la región”.¹⁵ Durante las últimas décadas, las

Obama en las páginas editoriales de América Latina

Obama empezó a enviar señales sobre lo que será su política hacia América Latina

Cambio, Colombia, 27 de marzo de 2009

Entre los latinoamericanos hay mucha expectativa. Tras años de la política unilateral de la administración Bush y su falsa disyuntiva de que “el que no está conmigo, está contra mí”, el ascenso de Obama y sus primeros anuncios—cerrar la prisión de Guantánamo y eliminar restricciones comerciales a Cuba—fueron recibidos con beneplácito. Existe la esperanza de construir una vecindad constructiva con los Estados Unidos.¹⁶

Obama y América Latina, un año después

Kevin Casas, La Nación, Costa Rica, 29 de enero de 2010

Podemos tener la certeza de que América Latina no es una prioridad para Estados Unidos si el momento más comentado en las relaciones hemisféricas durante el último año es cuando un presidente latinoamericano que no ha leído casi nada le regala un libro que casi nadie serio lee a un presidente norteamericano que casi no tiene tiempo para leer.

La participación del presidente Obama en la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, que incluyó la ofrenda bibliográfica de Hugo Chávez, es lo más cercano que ha habido a un relanzamiento de las relaciones hemisféricas. Al cabo de su primer año, los resultados de la Administración Obama en su política hacia América Latina son modestos, para decir lo menos.

Difícilmente podría ser de otra manera. Los retos que plantea América Latina para los EE.UU. simplemente no tienen la urgencia de los que emergen de otras regiones...

Hasta ahora, el cambio en el tono de las relaciones interamericanas que logró el presidente Obama en Trinidad no ha conducido a un solo progreso sustancial en los temas de interés común para las naciones del hemisferio. La realización de una reforma migratoria profunda en los EE.UU. está más distante que nunca, pese a las manifestaciones...

El desafío del crimen organizado ha recibido mayor atención, enteramente debida a la carnicería desatada en el norte de México. Obama ha tenido el gesto elemental de reconocer la responsabilidad de los EE.UU. en el inmenso problema del narcotráfico en México. Eso es muy poco, pero es más de lo que había hecho cualquier administración anterior.

Lo que no ha hecho es replantear los enfoques tradicionales para enfrentar el tráfico y el consumo de drogas. Mientras son cada vez más numerosas las voces que dentro y fuera de EE.UU. cuestionan los resultados de la fracasada “Guerra contra las Drogas”, el debate continúa teniendo un efecto insignificante en Washington.

Los temas relativos a la consolidación democrática tuvieron su cuarto de hora con la crisis hondureña, que no pasará a la historia como un momento estelar para la diplomacia estadounidense. Si la reacción inicial de la administración Obama ante el golpe de junio fue clara, rápida y de apoyo a la democracia, los siguientes meses dieron un testimonio incontrovertible de la inconsistencia y la limitada relevancia de la política de Washington hacia la región.

El hecho de que reconocer las elecciones de noviembre fuera la menos mala de las opciones, no las convierte en un triunfo democrático. A fin de cuentas, por razones de conveniencia política los EE. UU. acabaron capitulando ante todas las demandas de una élite reaccionaria empeñada en impedir cualquier transformación política o económica en Honduras. Eso dejó un sabor amargo en la boca. Como amargo empieza también a resultar el silencio de la administración Obama frente a los desvaríos autoritarios de Chávez y Ortega.

¿Y Cuba, la obsesión de toda una vida? En términos de su política hacia América Latina, el limitadísimo progreso hacia la normalización de la relación con Cuba es la mayor desilusión del primer año de Obama.

Predecible o no, la atonía de las relaciones entre EE.UU. y América Latina evidencia un tema de fondo: América Latina está cambiando con sorprendente rapidez, independientemente del estado de esas relaciones. Las tendencias que están transformando a la región—la emergencia de Brasil como potencia mundial, la expansión de las clases medias, la creciente presencia económica de China, la mayor participación política de las mujeres, para mencionar algunas—seguirán su marcha con prescindencia de cualquier decisión tomada en Washington.”¹⁷

La estrella de Obama se desvanece en A. Latina *El Mercurio, Santiago, Chile, 30 de noviembre de 2009*

La buena disposición inicial que se ganó Obama en América Latina comienza a consumirse, con costos para su influencia y para la estabilidad de la región. Aunque no lo desee y a su pesar, Estados Unidos sigue siendo un protagonista decisivo en Latinoamérica. Está obligado a tomar prontas definiciones.

Por carecer de medios para disponer de ayudas económicas significativas, para lograr mayor sintonía con América Latina debería revisar sus propias políticas sobre drogas e inmigración, poner fin al embargo a Cuba, contener sus presiones internas proteccionistas y armonizar sus posiciones sobre cambio climático, energía, Ronda de Doha y demás divergencias con Brasil, gravitante en la región...

Más importante: el multilateralismo prometido por Obama resulta muchas veces ilusorio en este continente, por las fuertes divisiones entre los gobiernos y la incapacidad de los organismos interamericanos.

Así lo muestra la creciente tensión entre Colombia y Venezuela por nuevas amenazas beligerantes de Chávez. La base del escalamiento son los acuerdos sobre facilidades para el uso de instalaciones militares colombianas por EE.UU....

Ante la inoperancia de la OEA, que estaba facilitando la polarización en Honduras, el Departamento de Estado se apartó de esa organización y de muchos de sus miembros, manifestando que reconocerá el resultado de las elecciones presidenciales de Honduras, en tanto los comicios sean libres y transparentes, independientemente de que el depuesto Presidente Zelaya fuera o no restituido en su cargo. Es razonable y legítimo apoyar el retorno a la democracia por la vía electoral,... tanto más cuanto que participan los partidos de oposición y de gobierno, y considerando que las presiones foráneas fueron un fracaso y que la Corte Suprema recientemente avaló la destitución. Sin embargo, de no conseguir que otros países se sumen al reconocimiento de las elecciones, EE.UU. se expone al aislamiento y a recriminaciones por retomar el unilateralismo. La duda es si Washington, sumido en otras urgencias, será capaz de adoptar definiciones, conseguir aliados y dar prioridad a sus relaciones con América Latina.¹⁸

fuerzas navales de EE.UU. podían ser asignadas en la región cuando fuera necesario, sin mencionar una flota numerada. No está claro para muchos en América Latina por qué ya no es el caso.

Algo que aumentó la preocupación fue el momento y la manera como los militares hicieron el anuncio, que tomó por sorpresa a la mayor parte de la región. Sin haber sentado las bases diplomáticas necesarias, los militares de EE.UU. dieron toda la impresión de que esta decisión tenía la intención de ampliar su presencia y capacidades en una región que no los veía con buenos ojos o que no veía la necesidad de esta escalada. Muchos lo consideraron como un desafío a su soberanía y un gesto evocador de la “diplomacia de los cañones” del pasado.

El 1 de julio de 2008, el Parlamento del MERCOSUR, que incluye a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, junto con delegados de Venezuela, Bolivia y Chile, expresaron su desacuerdo con esta decisión. El presidente Lula da Silva de Brasil dijo: “A mí me preocupa la IV Flota porque va a ir exactamente donde nosotros acabamos de descubrir petróleo”.¹⁹ En reunión con el Secretario de Defensa Robert Gates en septiembre de 2008, la ministra de Defensa de Argentina dijo que a su país le preocupaba la Cuarta Flota describiéndola como “una movida militar para la que no vemos ninguna explicación convincente”.²⁰

No fue sorpresa para nadie que Hugo Chávez de Venezuela hubiese sido muy franco en su desprecio por la presencia militar de EE.UU. en la región. En el otoño de 2008, en un movimiento sin precedentes desde la Guerra Fría, varios buques navales de guerra rusos, encabezados por el crucero de propulsión nuclear *Pedro el Grande*, se unieron a Venezuela para realizar maniobras conjuntas en el Caribe. Dos bombarderos rusos llegaron a Venezuela también para misiones de entrenamiento. El viceprimer ministro ruso Igor Sechen advirtió a los Estados Unidos: “Sería un error decir que una nación tiene derechos exclusivos en esta zona”.²¹

El restablecimiento de la Cuarta Flota y la firma del Acuerdo de Cooperación para la Defensa no son ciertamente las únicas causas del incremento de la tensión militar en la región. No obstante, es justo afirmar que, en ausencia de una explicación diplomática verosímil de tales acciones, éstas han sido motivo de preocupación real y generalizada.

El Comando Sur ha realizado gran parte de las iniciativas de divulgación del almirante Stravids que se conocen como “Asociación con las Américas”,

pero mucho de lo bueno que podría proceder de esta iniciativa queda anulado por la creciente percepción de proyección innecesaria de poder de EE.UU.

Al principio, desaparecida en acción: la política de derechos humanos de la administración de Obama

Cuando el Dalai Lama regresó a Washington para una reunión cuidadosamente escenificada con el Presidente en la “Sala de los mapas” de la Casa Blanca en febrero de 2010, meses después de haberse negado una reunión, pareció que la administración de Obama asumía las críticas de que su política exterior era abundante en cooperación pero corta en materia de derechos humanos. Aún esta pendiente ver si ese reconocimiento se extiende también a América Latina.

La respuesta contradictoria de EE.UU. al golpe de Estado del 28 de junio en Honduras, en el que los militares hondureños, con el apoyo civil, subieron al presidente Manuel Zelaya en pijama a un avión, envió al resto del hemisferio la señal de que la nueva administración de EE.UU. es ambivalente respecto a las violaciones al orden democrático y a los derechos humanos. Para los hondureños y latinoamericanos que se opusieron al golpe de Estado, los Estados Unidos resultaron inexplicablemente impotentes contra los líderes del golpe de una pequeña nación.

Que el gobierno de los EE.UU. no haya promovido o financiado este golpe de Estado en América Latina en particular, y que lo haya condenado es ciertamente un avance cuando se lo contrasta con doscientos años de frecuente respaldo de nuestro país a regímenes no democráticos. De hecho, Estados Unidos suspendió temporalmente la ayuda que fluía a través de canales gubernamentales hondureños hacia Honduras y redujo a un mínimo los contactos entre los militares de ambos países.

Pero estas posiciones principistas se vieron debilitadas por los sutiles titubeos del Departamento de Estado sobre si el golpe era de carácter civil o de carácter militar; esta última dispararía provisiones establecidas en la ley para un corte total de la asistencia. Aun más perjudicial fue la renuencia del Departamento de Estado a denunciar enérgicamente las violaciones generalizadas a los derechos humanos y a las libertades civiles. Frente al fracaso para alcanzar un acuerdo para convencer al gobierno golpista

a renunciar, y con el retraso de la confirmación de su más alto funcionario para América Latina, retenida por el senador Jim DeMint quien apoyó el derrocamiento del presidente Zelaya, la administración de Obama se desmoronó, expresando su voluntad de reconocer las elecciones, aun si no se cumplían las condiciones mínimas.

El golpe de Honduras, así como el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia que se describe a continuación, han sido sólo dos de los retos más recientes a la teoría de los militares de EE.UU. sobre la “democracia por ósmosis”, según la cual un aporte militar extenso de EE.UU. puede brindar respeto para los derechos humanos y valores democráticos.

Colombia es el caso perfecto para evaluar si la administración de Obama, a diferencia de sus predecesores, defenderá los derechos humanos cuando sus aliados más cercanos cometen serios abusos. El jurado aún no se ha pronunciado al respecto. Como regalo de despedida del presidente Bush, el presidente Álvaro Uribe recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en su visita a la Casa Blanca a principios de enero de 2009 impartir el respeto a los derechos humanos y los valores democráticos. La siguiente vez que el presidente Uribe visitó la Casa Blanca, el presidente Obama le dio la bienvenida pero le planteó al menos algunas de las preocupaciones sobre los abusos del ejército y sobre las escuchas telefónicas ilegales a los grupos de derechos humanos, periodistas y jueces. Cuando se le preguntó sobre las ambiciones de reelección del presidente colombiano, Obama aconsejó sin que se lo solicitaran que “dos periodos funcionan en nuestro caso y después de ocho años por lo general... la gente quiere un cambio”.²²

Sin embargo, para finales de 2009, el Departamento de Estado se negó a invocar las condiciones de derechos humanos aplicables a parte de la asistencia militar de EE.UU. destinada a Colombia. Al igual que sus predecesores, el gobierno de Obama certificó que Colombia había cumplido con los requisitos de derechos humanos, a pesar de la notoriedad del escándalo de las ejecuciones extrajudiciales—más de dos mil casos de homicidios deliberados de civiles presuntamente por el ejército—justo durante el período de certificación. A finales de 2008 se reveló el caso de los aberrantes asesinatos por dinero en Soacha. Se trató de una conspiración en la que los soldados les pagaron a redes criminales para que juntaran jóvenes, que luego eran asesinados por los soldados para aumentar el conteo de cuerpos.

Otra disposición de la legislación estadounidense dispuesta a limitar la asociación de EE.UU. con violadores de derechos humanos, la Ley Leahy, también ha seguido siendo insuficientemente aplicada en Colombia, tanto por el gobierno de Obama como el de Bush. Si bien se ha utilizado más para poner presión sobre Colombia que sobre muchos otros países, la inadecuada implementación de la Ley Leahy permitió la financiación de unidades de las fuerzas de seguridad comprometidas con ejecuciones extrajudiciales así como con el acopio de pruebas falsas obtenidas ilegalmente contra los defensores de los derechos humanos.²³

Pero estas posiciones principistas se vieron debilitadas por los sutiles titubeos del Departamento de Estado sobre si el golpe era de carácter civil o de carácter militar. Aun más perjudicial fue la renuencia del Departamento de Estado a denunciar enérgicamente las violaciones generalizadas a los derechos humanos y a las libertades civiles.

El Departamento de Estado tampoco mostró mucho interés en la elaboración de un informe mínimamente objetivo sobre el cumplimiento por parte de México de los requisitos de derechos humanos aplicables al paquete de asistencia militar de la Iniciativa Mérida. Por el contrario, se resolvió mantener la asistencia. Los grupos mexicanos de derechos humanos encontraron esto “alarmante” dado que las denuncias de violaciones a los derechos humanos por los militares sólo en 2009 incluyeron “desapariciones forzadas ... tortura brutal de docenas de funcionarios municipales en cautiverio en una base militar en Tijuana; ataque arbitrario a disparos contra un autobús lleno de civiles, matando a uno de ellos...”.²⁴ El senador Patrick Leahy comentó que “Es evidente que ni el Gobierno mexicano ni el Departamento de Estado han tratado los abusos a los derechos humanos cometidos por los militares quienes se están dedicando prioritariamente a funciones propias de la policía que no les corresponden”.²⁵

Para la primavera de 2010 surgieron algunas señales indicando que los derechos humanos se estaban convirtiendo en una mayor prioridad para el gobierno de Obama. El informe anual sobre derechos

humanos presentó una crítica más contundente sobre la compleja situación de los derechos humanos en países aliados claves de la región para los EE.UU. A diferencia de anteriores informes anuales, por ejemplo, el documento de 2010 sobre Colombia incluyó discusiones importantes y extensas sobre las ejecuciones extrajudiciales, vigilancias ilegales, y la emergencia de “nuevos” grupos paramilitares. Otra señal positiva sobre Colombia fueron las visitas regulares del embajador de EE.UU. a las oficinas de los grupos de derechos humanos, lo que contribuyó a enviar un mensaje de legitimidad al trabajo de los defensores de derechos humanos. En abril, el Presidente Obama le transmitió al Presidente hondureño Porfirio Lobo su preocupación sobre los asesinatos de periodistas y activistas.

Un paso positivo en 2009 fue la aprobación de una disposición en el proyecto de ley de Defensa impulsado por el representante Jim McGovern exigiendo al Secretario de Defensa que haga públicos los nombres de los estudiantes e instructores en el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (ICSH, antigua Escuela de las Américas). Permitirles a los activistas controlar si los violadores de derechos humanos han recibido formación en EE.UU. es un pequeño, aunque simbólico, paso hacia la rendición de cuentas.

Más allá de tomar medidas para evitar que la asistencia de EE.UU. contribuya al aumento de los abusos cometidos por las fuerzas aliadas de seguridad, la administración de Obama podría posicionarse de manera notablemente simbólica del lado de la búsqueda histórica de la verdad y la justicia en América Latina. En mayo de 2009, el ex presidente peruano, Alberto Fujimori, fue declarado culpable de graves violaciones a los derechos humanos. Los indomables activistas argentinos de derechos humanos, las víctimas y sus familiares, han trabajado durante años para llevar finalmente a juicio, décadas más tarde, a los acusados de muertes, desapariciones y torturas de algunas de las decenas de miles de víctimas de la “guerra sucia”. Sus homólogos colombianos están sentando valientemente las bases de tales ganancias aunque éstas podrían también no materializarse en veinte años. El gobierno de EE.UU. podría tomar un rol más visible por los que luchan por la justicia.

Por último, el gobierno de EE.UU. podría aprovechar para aprender algunas lecciones en materia de rendición de cuentas. El reconocer el papel de la asistencia militar de EE.UU. en el apoyo a regímenes abusivos, así como lograr una mayor rendición de cuentas sobre los abusos más

recientes de EE.UU. en otras partes del mundo, desde el uso de la tortura conocida como submarino hasta las cárceles clandestinas y las detenciones indefinidas, representarían un enorme avance hacia una nueva relación con América Latina.

Se dispara la asistencia en seguridad y luego se restringe levemente

Incluso después de los ajustes por inflación, el período 2008-2010 vio el mayor nivel de asistencia de EE.UU. a América Latina y el Caribe desde que se inició nuestro programa de monitoreo de las ayudas. En dólares nominales, estimamos que la asistencia global al hemisferio se acercará bastante a un tope nunca antes alcanzado de 3 mil millones de dólares en 2010. Esta cifra aumentará aún más después de que se apruebe la ayuda adicional a Haití, como se espera, en un proyecto de ley de asignaciones suplementarias.²⁶ El porcentaje correspondiente de asistencia militar llegará a su punto máximo en 2010, pero el suplemento para Haití y algunos cambios en el presupuesto para 2011 empezarán a inclinar la balanza en favor de la ayuda no militar.

La asistencia de EE.UU. para la región en 2010 estará más inclinada hacia el apoyo militar más que en cualquier otro año, excepto por el 2000, año en que se aprobó el primer paquete del “Plan Colombia”. Estimamos que el 49,5 por ciento de todos los paquetes asistenciales previos a Haití en 2010 serán militares y policiales. Durante la mayor parte de la década de 2000, este porcentaje estuvo apenas por encima del 40 por ciento.

Un programa de asistencia principalmente militar y policial explica el grueso del salto en el presupuesto de asistencia de 2008-2010. La “Iniciativa Mérida”, una propuesta del gobierno de Bush para dar a México y a Centroamérica asistencia para combatir el tráfico de drogas ilícitas, las pandillas y la delincuencia organizada, bombea más de mil millones de dólares en ayuda adicional a la región. Mientras tanto, la ayuda a Colombia, el mayor receptor de asistencia estadounidense durante la última década, sigue cercana a los altos niveles publicados a lo largo de la década de 2000, aunque ligeramente menos. Como resultado, se ha disparado el total acumulado de ayuda para la región, y ha aumentado el porcentaje correspondiente a asistencia en seguridad.

En 2009 y 2010, alegando la urgencia de la violencia en México, el gobierno de Obama y el

Ayuda de los EE.UU. a América Latina y el Caribe (todas las fuentes)							
Ayuda Militar y Policial (USD)							
1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
296,946,645	325,237,358	360,993,112	595,000,128	1,055,984,292	483,193,439	735,837,026	877,248,935
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010, est.	2011, req.
919,848,584	852,949,262	918,222,724	1,064,622,269	1,132,161,901	1,153,500,093	1,451,105,489	997,207,407
Ayuda Económica y Social (USD)							
1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
550,710,000	594,524,000	666,734,000	1,417,690,000	991,311,000	706,767,000	987,005,000	1,036,778,000
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010, est.	2011, req.
1,054,973,000	1,062,638,000	1,145,248,000	1,156,597,812	1,728,857,000	1,770,264,004	1,649,254,608	1,505,652,690

Congreso decidieron “concentrar” la ayuda a ese país en los artículos más caros: helicópteros y aviones valuados en cientos de millones de dólares, cuya fabricación y entrega toman usualmente de uno a dos años.

Sin embargo, la solicitud de asistencia de la administración de Obama para 2011, junto con el suplemento esperado, comenzará a cambiar la composición de la ayuda de EE.UU. a la región. Habiendo cubierto ya los pagos del equipo pesado, se reduce la asistencia para México en una tercera parte en la solicitud de ayuda para 2011, lo que disminuye la asistencia total para América Latina y el Caribe en más del 15 por ciento.

No compartimos la opinión de algunos analistas que lamentaron la propuesta del gobierno de Obama de recortar la ayuda en 2011 criticando este recorte como una prueba del “alejamiento” de Obama de América Latina. El panorama cambia sustancialmente cuando sólo dos países, México y Colombia, se sacan del análisis. La reducción del 15 por ciento de 2010 a 2011 es sobre todo en la

asistencia de seguridad para Colombia y México. Lo que se vería para el resto de la región sería una reducción en 2010 (sin contar la ayuda eventual a Haití) debido sobre todo a la finalización de los compromisos hechos en el marco del programa Desafío del Milenio, pero ese nivel se mantendría en 2011. Sin embargo, continúan algunos programas importantes de asistencia militar. El Gobierno enviaría cerca de 300 millones de dólares en asistencia militar y policial a México en 2011. La asistencia en seguridad para Colombia sigue siendo alta, y la firma del nuevo Acuerdo de Cooperación para la Defensa con Colombia podría aumentar el flujo de ayuda a través del presupuesto de defensa. Por otra parte, una nueva Iniciativa de Seguridad en la Cuenca del Caribe está incrementando la asistencia a las fuerzas de seguridad de América Central y el Caribe para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Si, tal como se espera, la administración de Obama y el Congreso aprueban un paquete masivo de asistencia suplementaria para Haití en 2010, el balance general de la ayuda para la región se

Ayuda de los EE.UU. a América Latina y el Caribe (todas las fuentes; excluyendo Colombia y México)							
Ayuda Militar y Policial (USD)							
1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
189,910,198	163,430,408	218,265,112	257,651,115	264,332,546	228,997,158	298,375,689	251,947,755
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010, est.	2011, req.
284,073,693	230,942,404	296,504,756	406,685,301	297,225,730	333,086,125	321,719,521	348,446,581
Ayuda Económica y Social (USD)							
1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
547,351,000	574,456,000	653,582,000	1,398,473,000	742,643,000	682,737,000	845,805,000	866,880,000
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010, est.	2011, req.
880,843,000	888,332,000	964,770,000	978,210,842	1,401,580,000	1,437,403,004	1,342,756,608	1,210,152,548

va a inclinar sustancialmente hacia la ayuda económica. Esto no afecta, por supuesto, el peso predominante que tiene todavía la asistencia en materia de seguridad de EE.UU. hacia muchos países del hemisferio.

Política antinarcoóticos: más agua por el cernidor

Durante tres décadas, los Estados Unidos han estado librando la “guerra contra las drogas” en Latinoamérica, enfocando la mayor parte de la asistencia militar y policial hacia los principales países de la región productores de drogas y activos en el narcotráfico. Los programas antinarcoóticos focalizados en la oferta de drogas como el Plan Colombia, el Programa Antinarcoóticos de los Andes, la Iniciativa Mérida y ahora la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, tienen como fin detener las drogas antes de que lleguen a Estados Unidos. Esta estrategia ha demostrado sistemáticamente que no es efectiva para frenar los cultivos de coca, la elaboración de cocaína, o la disponibilidad de drogas en el mercado estadounidense.

Desde el año 2000, Estados Unidos ha invertido aproximadamente 11 mil millones de dólares en asistencia antinarcoóticos para América Latina y el Caribe. No obstante, las estadísticas que se usan para medir el éxito no han variado significativamente: el número de hectáreas de coca cultivadas en la región andina permanece estable, el precio de la cocaína en las calles estadounidenses está más bajo que nunca, y el precio que se le paga al agricultor por la base de coca o pasta de coca no se ha modificado (ver los gráficos).²⁷ Por el contrario, los cultivos de coca se han dispersado y la violencia relacionada con el narco ha aumentado en todo el hemisferio.

Cultivo de coca en la región andina. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) reportó una importante caída del 18 por ciento en el número de hectáreas cultivadas de coca en Colombia de 2007 a 2008. Pero la cifra total para la región andina disminuyó solamente en un 7 por ciento, de 181.600 hectáreas cultivadas en 2007 a 167.600 hectáreas en 2008. (Los datos para 2009 estarán disponibles a mediados de 2010).

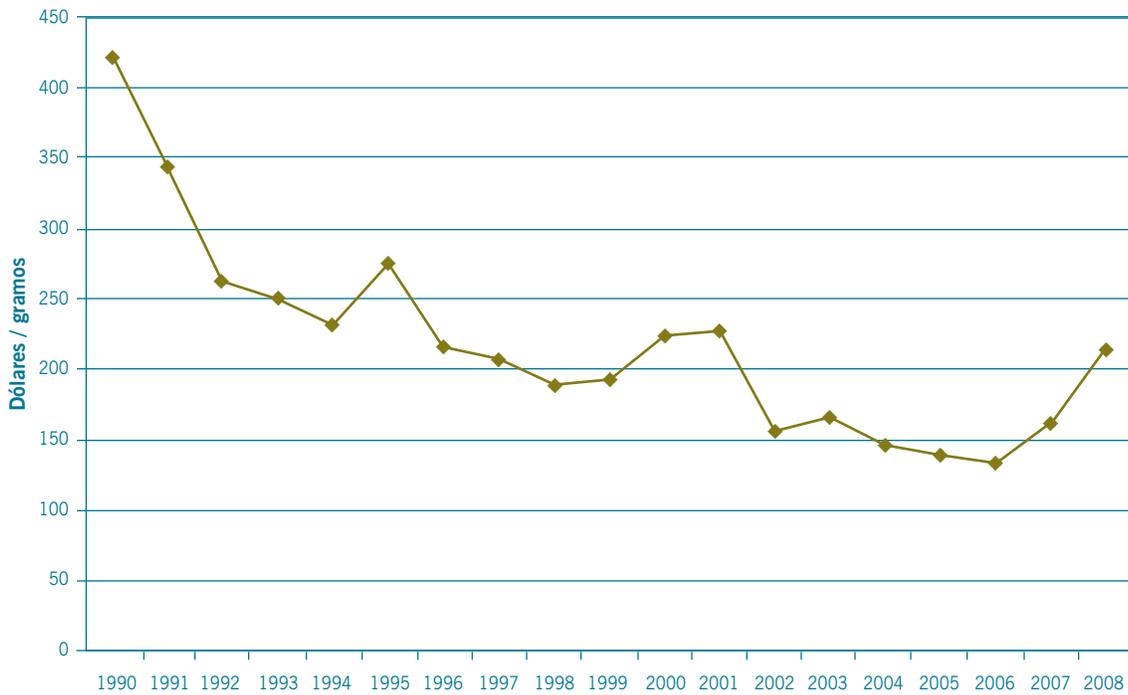
La ONU ha atribuido el descenso de los cultivos en Colombia a la erradicación manual de 96.115 hectáreas de arbustos de coca, lo que representa un

Precio de un kilo de base/pasta de coca en Colombia – Estimaciones de la ONU



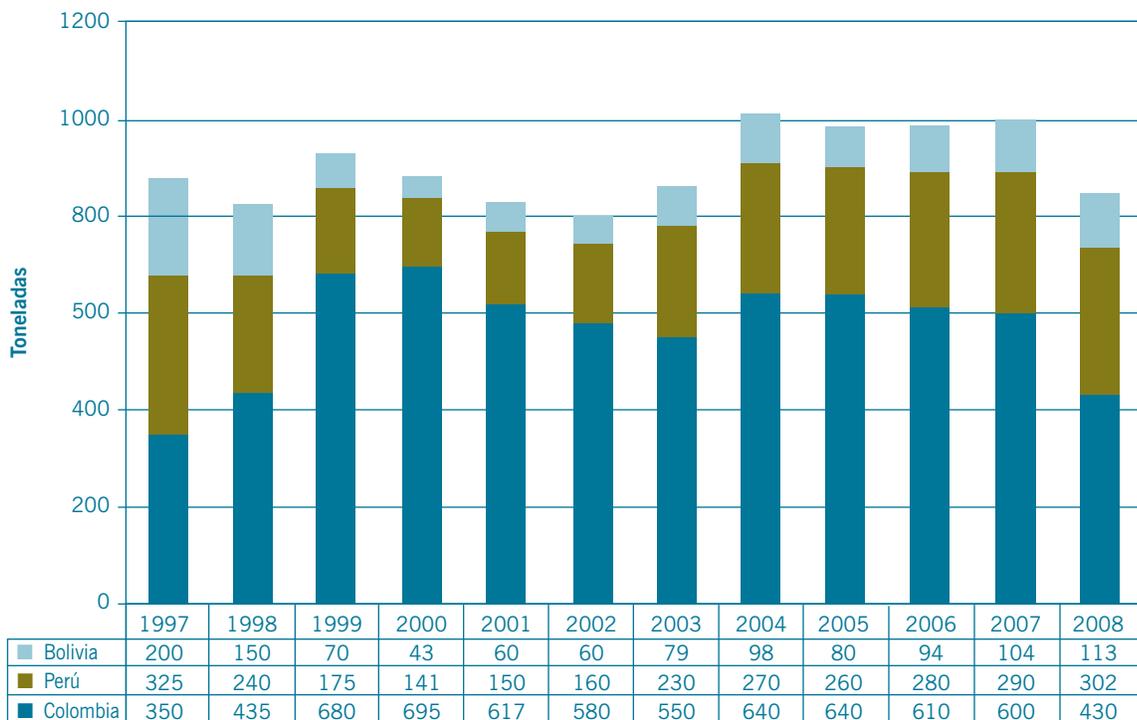
Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Pureza e inflación de precios ajustados de cocaína en EE.UU., 1990-2008



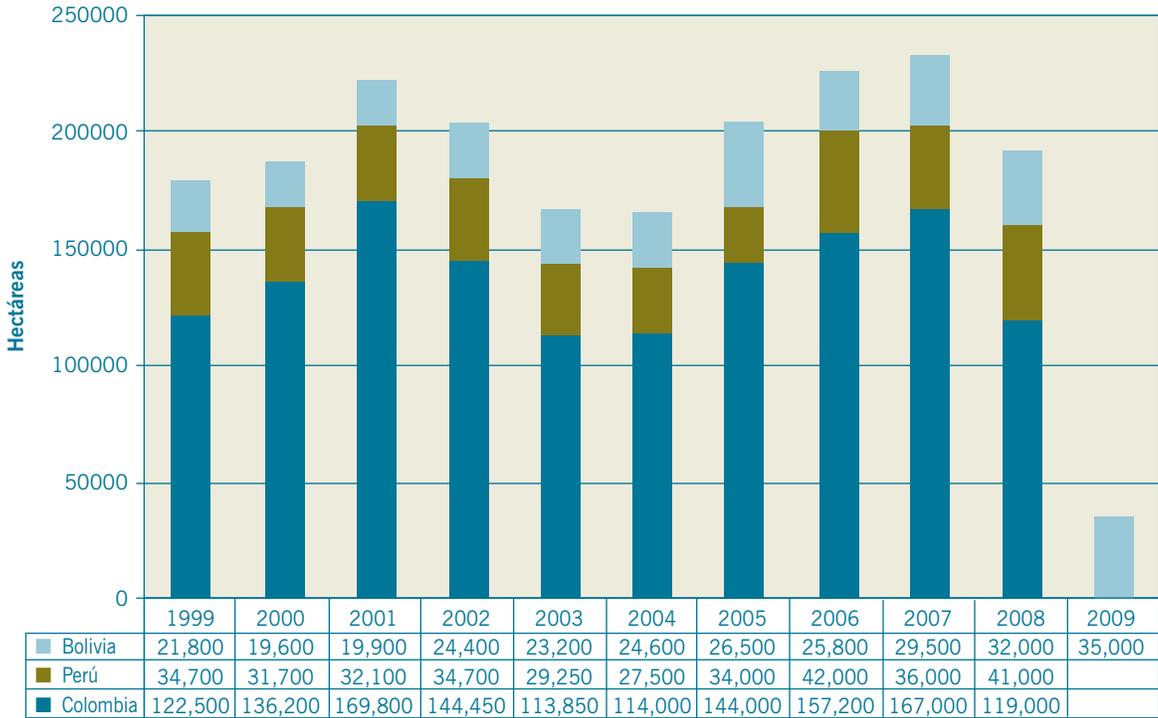
Fuente: Informe Estrategia Control Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado

Cocaína en los Andes: Estimaciones de la ONU



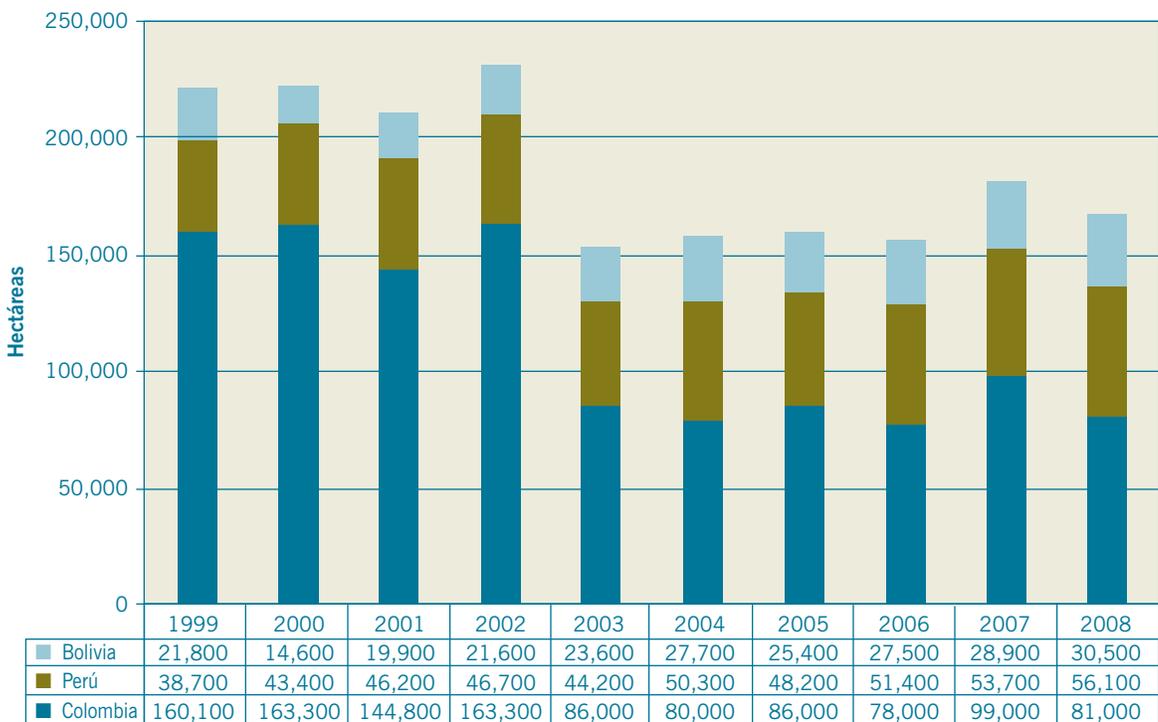
Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Cultivo de coca en los Andes—Estimaciones del Gobierno de EE.UU.



Fuente: Informe Estrategia Control Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado

Cultivos de coca en los Andes—Estimaciones de la ONU



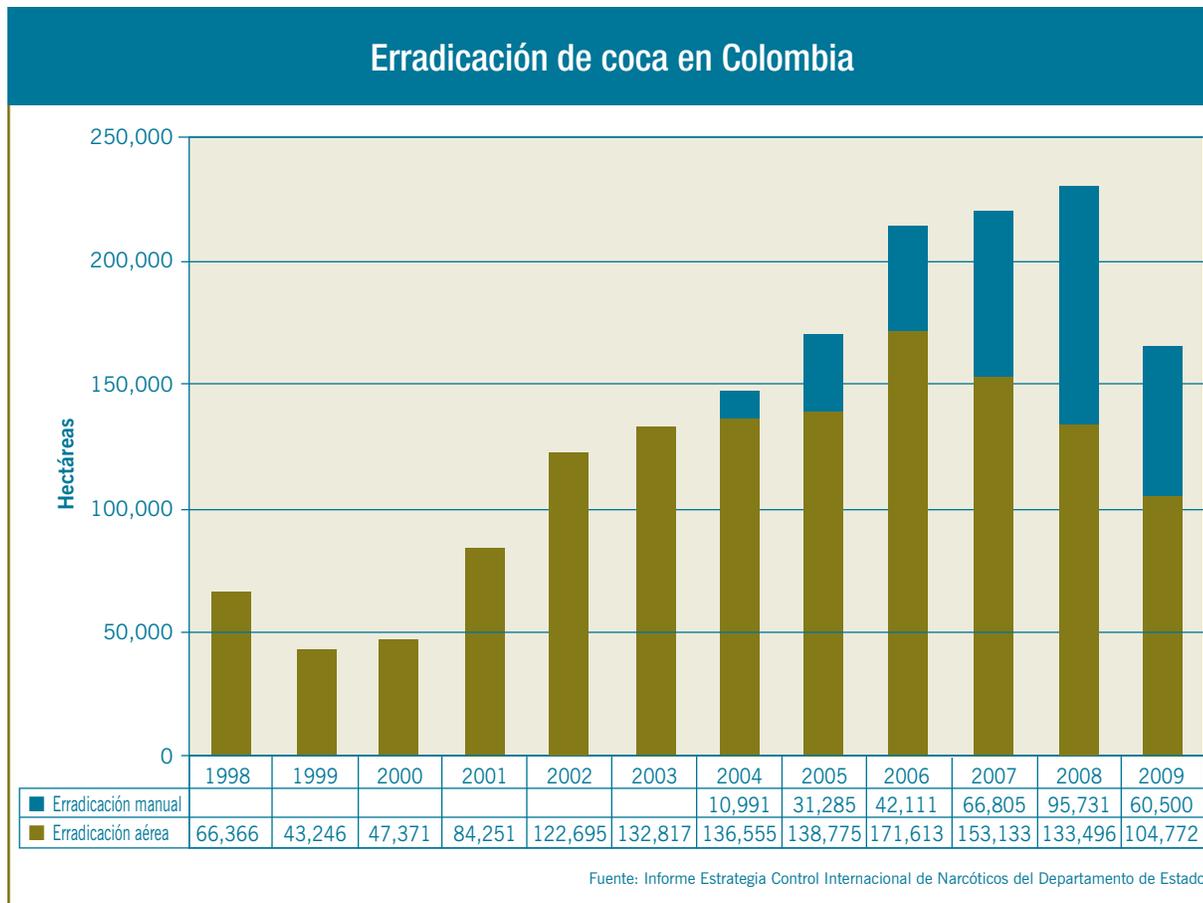
Fuente: ONUDD

incremento del 44 por ciento en comparación con el área erradicada manualmente en 2007. Este aumento se produjo en medio de una disminución importante de la fumigación aérea con herbicidas: de 153.133 hectáreas de coca en 2007 a 133.496 hectáreas en 2008.²⁸ El embajador de EE.UU. en Colombia, William Brownfield, de manera insólita admitió ante la prensa colombiana en marzo de 2010, refiriéndose al desplazamiento de los fondos de EE.UU. de las fumigaciones aéreas hacia el desarrollo alternativo: “Debo decirles a nuestros críticos: ‘Tenían razón’ y por eso estamos cambiando nuestra estrategia”.²⁹

Aunque la disminución en cultivos de coca en Colombia en el 2008 es alentadora, no es tan extraordinaria como suena. Esta representa un regreso a los mismos niveles de cultivos de coca que la agencia de la ONU había detectado entre 2003 y 2006, años en los que el Plan Colombia puso en marcha un aumento en la erradicación, especialmente en el departamento del Putumayo. Fueron también los años en los que la guerrilla de las FARC perdió el control de cinco municipios en el occidente del departamento del Meta y en el norte del Caquetá, territorios sobre los cuales

había anteriormente adquirido dominio durante el fracasado proceso de paz de 1998-2002. Es poco probable que el progreso haya continuado en 2009, cuando la erradicación, tanto manual como aérea, se redujo significativamente a medida que la crisis económica y el colapso de las grandes pirámides golpeaban duro las zonas de cultivos de coca.

Los estimados anuales de EE.UU. sobre áreas cultivadas de coca ofrecen cifras mayores aunque con una tendencia similar a la disminución en Colombia y aumento en Bolivia y Perú en 2008. Es notorio que el Gobierno de EE.UU., que ha estado calculando los cultivos de coca en la región andina desde finales de la década de los ochenta, ha registrado de manera sistemática un total regional de cerca de 200.000 hectáreas para todo este periodo. De 1987 a 2008, el promedio anual estimado fue de 200.040 hectáreas, oscilando desde un mínimo de 176.000 hectáreas (en 1987) a un máximo de 232.500 hectáreas (en 2007). Las últimas estimaciones (192.000 hectáreas en 2008) son solamente 4 por ciento inferiores al promedio de hectáreas cultivadas durante 22 años y 5 por ciento inferiores al promedio de los últimos cinco años (2004-2008). Además, las estimaciones de



2008 de 192.000 hectáreas fueron casi idénticas a las estimaciones de 2000 (190.000 hectáreas), el año en que empezó el Plan Colombia.

Otra tendencia desalentadora en Colombia es que mientras más agresivamente se erradica la coca más se dispersan los cultivos por el país y se trasladan a otros países productores de coca. Este es el fenómeno que se conoce como “efecto globo”, una teoría que argumenta que mientras la demanda sea fuerte, la eliminación de hectáreas cultivadas de coca empuja la producción de cultivos de coca a nuevas áreas dentro de la región. Los progresos de la erradicación en un departamento de Colombia quedan a menudo neutralizados por el incremento de la coca en otros departamentos. El informe de la ONUDD confirma esto: el 75 por ciento de las parcelas de coca que la agencia detectó en 2008 no estaban plantadas con coca en 2007. Y en el 59 por ciento de éstas no se reportó coca en ninguno de los informes previos de la ONUDD.

El embajador de EE.UU. en Colombia, refiriéndose al desplazamiento de los fondos de EE.UU. de las fumigaciones aéreas hacia el desarrollo alternativo, admitió: “Debo decirles a nuestros críticos: ‘Tenían razón’ y por eso estamos cambiando nuestra estrategia”.

El efecto globo en el narcotráfico. Además del desplazamiento de la producción de coca en los Andes, la lucha de los Estados Unidos contra la droga ha causado cambios en los patrones de tráfico. Este “efecto globo” se ve reflejado en el aumento de las tasas de delincuencia en toda América Central, en el aumento de la incidencia del tráfico como problema en Ecuador y Venezuela, y en las nuevas rutas emergentes de tráfico de drogas a través de África occidental hacia Europa.

En 2008 y 2009, Estados Unidos y México cambiaron su enfoque orientándolo hacia los traficantes de droga y los grandes cárteles de la droga de México, obligando a los narcotraficantes a buscar rutas alternativas, principalmente a través de Centroamérica y el Caribe. En 2008, aproximadamente el 65 por ciento de los embarques de cocaína de la región andina se dirigieron primero a Centroamérica, en donde

países como Costa Rica y Panamá se han ido convirtiendo en el primer punto de entrada, mientras que países como Guatemala registran tasas de asesinatos superiores incluso a las de México y Colombia.³⁰

Estados Unidos ha invertido ya unos 1.400 millones de dólares para combatir el narcotráfico en México en el marco de la “Iniciativa Mérida” que no ha tenido hasta ahora más que un impacto menor en la oferta de drogas en EE.UU. y ningún efecto en la alarmante violencia en México.

Cambio de actitud en América Latina. El sentimiento de frustración por los resultados de la lucha contra las drogas y por sus duros impactos está aumentando en la región. En febrero de 2009, los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México) publicaron un informe sobre los efectos limitados e indeseados de la guerra a las drogas en América Latina. “Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma” recomienda una nueva estrategia basada en el tratamiento para el consumo de drogas como un problema de salud pública, la reducción del consumo a través de la educación y la prevención, y un enfoque en la represión al crimen organizado.³¹

El sentimiento expresado en “Drogas y Democracia” se ha visto reflejado también en medidas tomadas recientemente por varios gobiernos de América Latina. En 2009, México y Argentina comenzaron a adoptar enfoques que se perciben como más efectivos como la descriminalización de la posesión para uso personal y el tratamiento para los consumidores de drogas, con el objetivo de liberar a la policía para que pueda centrarse en las grandes organizaciones narcotraficantes en lugar de hacerlo en los usuarios a pequeña escala.³²

¿Están la administración de Obama y el Congreso dispuestos a cambiar la política? A pesar de las esperanzas que suscitan un enfoque más pragmático, todavía no hemos visto grandes cambios en la política antinarcóticos de EE.UU. A la luz de la rigidez que demuestra la política antidroga de EE.UU., incluso unos pocos comentarios francos pueden ser bienvenidos. En un discurso ofrecido en México, la Secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton reconoció el papel desempeñado por la demanda estadounidense de drogas, admitiendo que “la demanda insaciable de drogas ilícitas en EE.UU. alimenta el tráfico

de drogas.”³³ El director de la Política Nacional de Control de Drogas, Gil Kerlikowske, reconoce también la adicción a las drogas como un problema de salud pública.³⁴ Independientemente de lo que los funcionarios del gobierno de Obama puedan pensar sobre los recientes cambios en la política doméstica de drogas de los países latinoamericanos, estos se han abstenido en buena parte de hacer críticas directas lo cual demuestra una mejora en el enfoque con respecto a gobiernos anteriores. La solicitud de fondos federales para prevención y tratamiento para 2011 es modesta pero favorable a un incremento. Sin embargo, los aspectos de la política de drogas en el exterior no revelan mucho sobre un nuevo enfoque, más allá de la reducción gradual del controversial programa de fumigación aérea en Colombia (una medida que ya había sido puesta en marcha en presupuestos anteriores aprobados por un Congreso controlado por los demócratas).

El Congreso de Estados Unidos está al menos comenzando a reconocer la necesidad de reevaluar la política de drogas de EE.UU. En octubre de 2009, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley presentado por el Representante demócrata Eliot Engel. La “Ley de la Comisión de Políticas de Drogas para el Hemisferio Occidental de 2009” tiene como objetivo establecer una comisión bipartidista de diez miembros para hacer frente a la fallidas políticas de EE.UU. y ofrecer recomendaciones para su mejoramiento, con el objeto de reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas.³⁵ Al introducir el proyecto de ley, el Representante Engel dijo: “Está claro que ha llegado la hora de reexaminar nuestros esfuerzos antinarcóticos aquí en casa y a lo largo de las Américas. Mi proyecto de ley evaluará todos los aspectos de la guerra contra las drogas, incluyendo la prevención y los programas de tratamiento en Estados Unidos”.³⁶

Incluso este paso potencialmente positivo podría no seguir avanzando mientras no haya un proyecto de ley paralelo en el Senado (en donde un proyecto de ley relacionado para crear un panel especial para recomendar reformas al sistema de justicia penal de EE.UU. ha sido aprobado por el Comité Judicial pero aun enfrenta un futuro incierto). Una evaluación seria sobre la política antidroga es una deuda que EE.UU. viene acarreado desde hace años, dado que las últimas dos décadas de lucha contra los cultivos de la oferta y el tráfico no han producido cambios significativos. En su lugar, se han limitado a dispersar los problemas a nuevas regiones, como América Central y el Caribe.

El Plan Colombia le da paso a la “Acción Integral”

En 1990 Colombia superó a El Salvador como principal receptor de asistencia militar y policial del hemisferio. Colombia permaneció en el primer puesto hasta junio de 2009, cuando una asignación suplementaria para la “Iniciativa Mérida” otorgó a México el primer lugar. Sin embargo, las fuerzas de seguridad de Colombia continuarán recibiendo cerca de un millón de dólares diarios en ayuda estadounidense.

En 2007, después de que el Partido Demócrata asumiera el control mayoritario de ambas cámaras, el Congreso de los EE.UU. comenzó a recortar la asistencia militar y a aumentar la ayuda para la creación de instituciones económicas y civiles en Colombia. El programa de fumigación aérea en particular se redujo profundamente.

Desde entonces, el Poder Ejecutivo ha hecho otros ajustes a la asistencia a Colombia, fuertemente influenciado por una manera de percibir la contrainsurgencia que está muy en boga en los círculos de políticas de defensa en EE.UU. como resultado de la experiencia en Irak y Afganistán. A partir de 2004 y con más impulso desde 2007, el Comando Sur de los EE.UU. y (posteriormente) la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional trabajan con el gobierno colombiano en una nueva estrategia llamada “Acción Integral”.

En algunas subregiones del país, una agencia de la Presidencia de Colombia conocida como el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI) supervisa lo que ha sido diseñado como un proceso gradual y coordinado para llevar un gobierno funcional a zonas que nunca antes han conocido ninguna forma de gobierno. Según el plan, primero el ejército entra en cada zona, dispersa a los grupos armados ilegales y crea un perímetro de seguridad. Dentro de ese perímetro, el resto del gobierno—policía, justicia, propietarios de la tierra, constructores de carreteras, salud, educación, y proyectos productivos—entra rápidamente. En teoría, la población comienza a apoyar sustantivamente la presencia del gobierno de manera tal que el perímetro de seguridad se amplía hasta el punto de que no se hace necesaria la presencia militar.

El gobierno de EE.UU. está apoyando este concepto de Acción Integral de manera más fuerte en cinco zonas del país, según un marco de trabajo desarrollado en 2009 llamado Iniciativa Estratégica de Desarrollo de Colombia (CSDI, en inglés).³⁷



 **Áreas en las que se centrará la ayuda de los EE.UU. en el marco de la CSD**

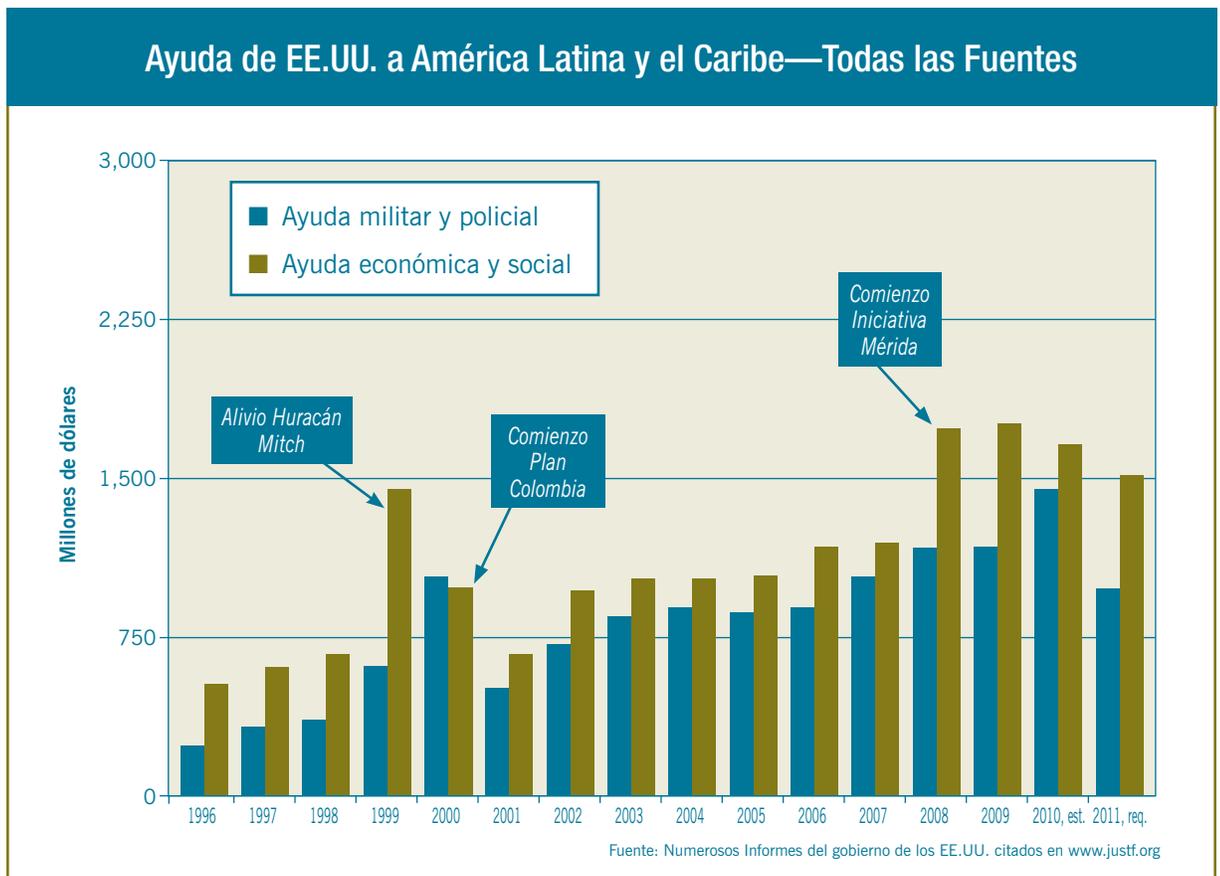
● Bases mencionadas en el Acuerdo de Cooperación para la Defensa entre EE.UU. y Colombia

El Comando Sur de EE.UU. y USAID están trabajando juntos en estas áreas, y proyectan invertir varios cientos de millones de dólares en los próximos años. Donde más han trabajado es en la zona de La Macarena, a unos 320 kilómetros de Bogotá, que es una región que ha estado durante bastante tiempo bajo control de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Allí ha estado funcionando desde 2007 el “Plan de Consolidación Integral de La Macarena” (PCIM) bajo la coordinación de CCAI. La mayor parte del apoyo de EE.UU. a este modelo en otras partes del país ha comenzado en 2009. Fuera de estas zonas de la CSDI, el gobierno de EE.UU. no planea invertir mucho en los próximos años.

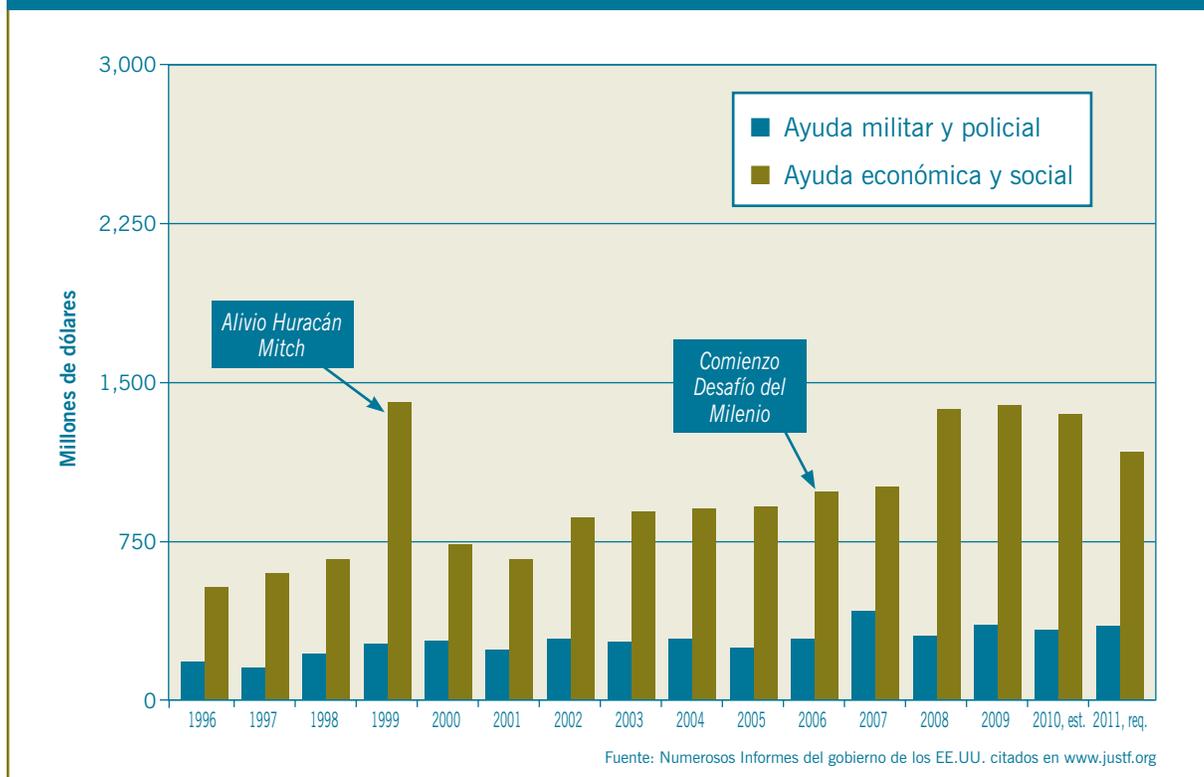
Citando la experiencia de La Macarena, funcionarios estadounidenses y colombianos han emitido declaraciones elogiosas sobre el éxito del modelo. Se ha hablado de adaptar la estrategia de la Acción Integral en Afganistán y en otras partes del mundo en donde operan grupos armados en zonas sin gobierno.³⁸ Efectivamente, muchas de las poblaciones de la región de La Macarena son ahora más seguras, con poca actividad guerrillera en el “núcleo urbano” de los poblados, y con una presencia gubernamental que ha sido establecida por primera vez.

Pero el modelo de Acción Integral plantea riesgos. Ningún área, ni siquiera La Macarena, ha logrado una suficiente mejora de la seguridad como para permitirles a los militares reducir su presencia y dar paso al liderazgo civil. De hecho, en 2009 la actividad de las FARC aumentó en la zona de La Macarena, volviendo más peligrosas las zonas fuera de los pueblos para la mayoría de los proyectos civiles. Mientras tanto, los ministerios y agencias civiles del gobierno colombiano han sido lentos en sumarse al esfuerzo. El resultado general es el serio peligro de una militarización del desarrollo: que los soldados tengan el papel principal en los proyectos humanitarios y productivos, incluso en los procesos de desarrollo comunitario. Esto no es deseable ya que distorsiona el papel de lo militar en la sociedad, y porque al identificar tan estrechamente proyectos de asistencia económica con operaciones militares convierte a estos últimos en blanco fácil de ataque de la guerrilla.

Los otros obstáculos tienen que ver con la impunidad: aumentar la presencia estatal puede ser más perjudicial que benéfica si los representantes del gobierno, tanto militares como civiles, no enfrentan las consecuencias de haber actuado de manera abusiva o corrupta. Los informes de



Ayuda de EE.UU. a América Latina y el Caribe – Todas las fuentes – Excluyendo Colombia y México



abusos a derechos humanos, detenciones masivas, o tolerancia de grupos paramilitares “nuevos” o “emergentes” son difíciles de verificar, dadas las condiciones de seguridad en las zonas de Acción Integral. No obstante, los paramilitares son de todas maneras bastante preocupantes debido a su potencial para debilitar aún más la ya muy débil confianza de la población en lo que se supone que es un gobierno “legítimo”. Igualmente, la erradicación forzada de la coca pone en riesgo el apoyo al gobierno si ésta se hace abusivamente y si no está directamente coordinada con la seguridad alimentaria y la ayuda al desarrollo económico.

El modelo de Acción Integral representa una mejora respecto del enfoque casi exclusivamente militar aplicado antes en esas áreas del país. Parece haber un mayor reconocimiento sobre el hecho de que el problema que la política de EE.UU. necesita ayudar a Colombia a resolver con mayor ímpetu es el de la gobernabilidad: la falta de presencia estatal, tanto civil como militar, en muchas áreas del territorio nacional. Esto es un gran cambio conceptual tras años de atajos fracasados como el programa de fumigaciones. Perla “Acción Integrada” podría conducir a resultados desastrosos

sin un protagonismo civil más destacado, consultas directas con la población afectada, voluntad para enfrentar a los líderes políticos locales corruptos, un compromiso más claro con los pequeños terratenientes, y un esfuerzo de alto perfil que asegure que los representantes gubernamentales no actúan con impunidad. Mientras que no se hagan ajustes en esta dirección, el modelo de Acción Integral podría convertirse en una actividad más en la larga lista de estrategias frustradas adoptadas y abandonadas durante los últimos veinte años.

Compra de armas: Sudamérica se abastece

La reactivación de la Cuarta Flota de EE.UU. y el nuevo acuerdo sobre las bases con Colombia han deteriorado—no reforzado—el ambiente de seguridad de la región. El aumento de la presencia militar de EE.UU. junto con las tensiones regionales existentes les ofrece a los países sudamericanos una justificación conveniente para incrementar sus gastos en armamento.

Durante muchos años no hubo prácticamente modificaciones en los presupuestos de defensa nacional de Suramérica, pero están apareciendo informes de nuevas e importantes compras de armas por parte de Brasil, Venezuela, Ecuador, Chile y Colombia, entre otros en la subregión. Más allá de poder definir a esta tendencia como una carrera armamentista o no, el hecho es que el incremento es considerable. Liderado por las compras de armas, el gasto de defensa de América del Sur aumentó en un 30 por ciento de 2007 a 2008, alcanzando 50 mil millones de dólares.³⁹

Algunos ejemplos ilustran la magnitud de esta nueva tendencia. Brasil, que compra y vende armas, ha aumentado su presupuesto militar en un asombroso 50 por ciento solamente durante la administración de Luiz Inácio Lula da Silva.⁴⁰ Venezuela, alegando que necesita armarse contra una invasión de EE.UU., ha gastado casi 7 mil millones de dólares en adquisición de armamento en los últimos tres años.⁴¹ Y nada más en 2008, Colombia, el aliado más fuerte de EE.UU. en la región, gastó unos 5.500 millones de dólares en compras militares; 13,5 por ciento más que en 2007.⁴² La mayor parte del continente presenta un patrón similar.⁴³

Una carrera armamentista en Suramérica podría despertar viejos conflictos irresueltos, agravar las actuales tensiones bilaterales, y exacerbar la desconfianza y el temor. Las relaciones entre Colombia, Venezuela y Ecuador son cada vez más tensas, y otros conflictos regionales siguen sin resolverse, como la disputa entre Chile y Bolivia y entre Chile y Perú. La información sobre las compras de armas en Suramérica es difícil de encontrar y rastrear, y aún más difícil de verificar. Muchos de los detalles sobre gastos de defensa no provienen de los gobiernos u otras fuentes oficiales, sino de los medios de comunicación y de analistas. Es posible que muchos de los acuerdos reportados sobre créditos y compras no se hayan completado o no se completen jamás. Pero en ausencia de información pública oficial estos informes son a menudo los primeros indicadores de lo que está sucediendo. Esto es señal de un problema conexo: la falta de transparencia y de comunicación diplomática.

Las naciones de Sudamérica tienen derecho a armar y modernizar sus sistemas de defensa. Muchos de los recientes incrementos en los gastos de defensa tienen, en parte, la intención de actualizar y modernizar equipos militares.⁴⁴ Pero para evitar una carrera armamentista los

países deben revelar sus compras a través de canales oficiales, comunicar sus intenciones y establecer iniciativas para crear confianza y seguridad. Una de estas iniciativas, que muchos países sudamericanos han usado antes, es el “Libro Blanco”, una publicación regular que comunica los objetivos estratégicos de defensa y prioridades presupuestarias del país. Esto debería institucionalizarse como una vía de comunicación y de transparencia sobre los gastos e intenciones de defensa. El Consejo de Defensa Suramericano, apoyado por UNASUR y la OEA, podría ejercer un liderazgo alentando a los países a desarrollar Libros Blancos y encargarse de su difusión y distribución. El Consejo podría también desarrollar pautas para el Libro Blanco que sirvan como guías a seguir por los países cuando elaboren estos documentos.

El Gobierno de EE.UU. podría contribuir a la estabilidad regional y a disminuir las tensiones regionales que motivan las compras de armas por medio de más diplomacia y transparencia. Las relaciones podrían mejorarse con acuerdos o notas diplomáticas que declaren explícitamente las intenciones militares de EE.UU. en la región, minimizando así la ansiedad motivada por potenciales acciones futuras.

Presencia militar de EE.UU. en la frontera

Un año después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el Departamento de Defensa reorganizó su Plan de Comando Unificado para incluir al nuevo Comando Norte de EE.UU. A diferencia de los otros cinco comandos de combate regionales, la responsabilidad del Comando Norte incluye la defensa militar de la propia “patria”, Estados Unidos. Su área de interés comprende tierra, mar y aire dentro del territorio continental de Estados Unidos, Alaska, Canadá, México y las aguas circundantes.

Desde la década de los ochenta, el Congreso ha autorizado al Departamento de Defensa para que realice misiones de apoyo antinarcóticos a lo largo de la frontera, y después del 11 de septiembre este mandato se amplió para incluir actividades antiterroristas. Desde la creación del Comando Norte, el Departamento de Defensa ha aumentado su perfil en seguridad fronteriza, pero éste no tiene todavía la responsabilidad de facto para “asegurar” las fronteras, que es una autoridad reservada del Departamento de Seguridad Nacional.

La Ley Posse Comitatus. La capacidad de los militares de EE.UU. para participar en actividades de aplicación de la ley está regulada desde la época posterior a la Guerra Civil por una ley conocida como la Ley Posse Comitatus.⁴⁵ Por más de un siglo, los ciudadanos estadounidenses han gozado de una línea más o menos clara que divide las responsabilidades de las agencias policiales de aquellas de los militares dentro de nuestro país, impidiendo el uso de tropas federales militares para hacer cumplir la ley.

Los gobernadores de todos los estados tienen, bajo el Título 32 del Código de EE.UU., a su disposición tropas de la Guardia Nacional que pueden ser usadas en circunstancias extremas para el cumplimiento de la ley. Estas fuerzas responden al Gobernador, quien es elegido por la gente del estado. Esta situación es diferente a la de los militares de EE.UU.; bajo el Título 10 la autoridad sobre las Fuerzas Armadas está ligada directamente a la cadena de mando federal que llega hasta el Presidente como Comandante en Jefe.

Las agencias policiales en general, ya sean federales o locales, están entrenadas para usar el mínimo de fuerza necesaria para aplicar la ley. Por el contrario, las tropas militares, en general, están entrenadas para usar una fuerza letal contundente para combatir y ganar guerras.

Si bien el Ministerio de Defensa no tiene potestades para involucrarse en actividades de aplicación de la ley, posee una cierta autoridad limitada para apoyar agencias policiales federales, estatales y municipales.⁴⁶ En 1986, el Departamento de Defensa emitió una directiva que clarificó las restricciones puestas a los militares en las funciones de asistencia a la aplicación de la ley.⁴⁷ Esta establece que los militares no pueden estar involucrados en la interceptación de vehículos, embarcaciones o aeronaves; no pueden realizar registros o incautaciones; y no pueden hacer arrestos, detenciones, parada y cacheo, o actividades similares. Tampoco se puede utilizar personal militar para la vigilancia o persecución de individuos, o como agentes encubiertos, informantes, investigadores o interrogadores.⁴⁸

En 2006, el Congreso, frustrado por lo que consideraba como una aplicación ineficaz de la ley, aprobó una ley que enmienda partes de la Ley Posse Comitatus y permite ampliar el poder del Presidente para declarar ley marcial y hacerse cargo de las tropas de la Guardia Nacional sin la autorización del Gobernador del estado.⁴⁹

Estas disposiciones fueron derogadas el año siguiente por la nueva mayoría demócrata en el Congreso.⁵⁰

Asistencia del Comando Norte a la aplicación de la ley. Durante los últimos años, debido al aumento de la violencia relacionada con las drogas, el Comando Norte ha buscado modos de impulsar la presencia militar estadounidense a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México. En marzo de 2009, el comandante general de Comando Norte, Victor E. Renuart declaró ante el Senado de los EE.UU. que el Comando Norte está trabajando con la Guardia Nacional, la Agencia de Cooperación de Seguridad y Defensa, y otras autoridades para asegurar la frontera contra la infiltración de los cárteles mexicanos de la droga.⁵¹ Adicionalmente, el Comando Norte suministra tecnología a la Aduana y la Patrulla Fronteriza de EE.UU. y otras autoridades relacionadas con la aplicación de la ley.⁵² Además, un comando subalterno del Comando Norte, la Fuerza de Tarea Conjunta del Norte,

“empleó sensores comunes de aire, tierra y mar a lo largo de las fronteras suroeste y norte de la nación y las costas; llevó a cabo la detección y seguimiento de amenazas de tráfico sospechoso; proporcionó información e intercambio de inteligencia entre las agencias policiales, apoyó las solicitudes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. para aumentar la infraestructura táctica a lo largo de la frontera sudoeste; y aplicó la ley federal con otros apoyos como transporte, capacidad de detección de túneles, y conocimientos básicos de entrenamiento militar”.⁵³

Bajo la Iniciativa Mérida y usando la autorización de la “Sección 1206” del Departamento de Defensa para utilizar su presupuesto para entrenar y equipar fuerzas militares extranjeras, el Comando Norte ha proporcionado entrenamiento y equipo militar de EE.UU. al ejército mexicano, incluyendo equipos de protección individual, equipos de medios digitales forenses, dispositivos de visión nocturna, y el equipo necesario para abordar buques sospechosos en el mar. También se facilitaron helicópteros de transporte y aeronaves de vigilancia marítima a los militares mexicanos.

Hace dos décadas, el Congreso de EE.UU.⁵⁴—pese a las objeciones del entonces Secretario de Defensa Frank Carlucci—convirtió en ley permanente una sección que autoriza al

Departamento de Defensa a asumir el liderazgo en la detección y control del tráfico de drogas que entra a los Estados Unidos, lo que hasta entonces era responsabilidad policial.⁵⁵ Se argumentó que el ejército tenía mayor capacidad técnica y los recursos necesarios para llevar a cabo tales tareas policiales. Hoy el Comando Norte, una vez más debido a su capacidad técnica de avanzada y a su riqueza de recursos, tiene una creciente participación en la asistencia a la aplicación de la ley en las fronteras. Mientras que el Comando Norte continúe solamente asintiendo con la importancia de los principios de la Ley Posse Comitatus, la continua tendencia de acudir al Departamento de Defensa ante la frustración que produce la incapacidad de las agencias tradicionales de aplicación de la ley merece una atención especial.⁵⁶

El Comando Sur a la cabeza

En nuestro informe de abril de 2008, *La política exterior se viste de camuflado*, detallamos la ambiciosa reorganización del Comando Sur de los EE.UU. de un “Comando de Combate” a un “Comando de Seguridad Interagencial Conjunto”. El objetivo del cambio era pasar de una organización militar con un enfoque tradicional en la formación e intereses estratégicos y tácticos a una organización que representa más una “fuerza multiplicadora” de diferentes agencias entrelazadas que integra los esfuerzos no sólo militares sino de otros organismos civiles de los EE.UU. El nuevo comando ha completado su reorganización y ha establecido como *titular adjunto* del comandante militar a un embajador del Departamento de Estado de los EE.UU.

La intención de este nuevo proyecto organizacional era la de utilizar el mismo esquema eventualmente como modelo para el conjunto total de los comandos regionales de combate. El Comando África (Africom) fue activado formalmente como un comando inter-agencial siguiendo las líneas del nuevo modelo del Comando Sur en octubre de 2008. No sorprende que la amiguedad de la línea que separa las responsabilidades civiles de las responsabilidades militares en Africom haya sido motivo de controversia desde el cambio. El Inspector General del Departamento de Estado emitió un informe sobre la “militarización de la diplomacia”, donde explicaba que “el personal de la Embajada recibió poca instrucción sobre cómo integrarse y trabajar con los funcionarios de Africom, por ejemplo. Y dentro del departamento, hay ‘un debate interno considerable sobre la

conveniencia de la financiación militar de EE.UU. para el desarrollo y para las actividades de diplomacia pública en África”.⁵⁷

Como el Comando Sur siguió adelante con su reorganización, el Comité de Servicios Armados de la Cámara intervino haciendo notar sus propias preocupaciones. En el informe que acompaña la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2009, el comité señaló asuntos relacionados con “la conveniencia de incluir el bienestar económico de una región, en este caso, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, en el centro de la misión [del comando de combate]”.⁵⁸ A continuación plantea un interrogante sobre “El papel [que] el Departamento de Defensa en general, y los comandos [combatientes], más concretamente, deberían tener en el establecimiento de la política de ayuda exterior como parte del proceso de asistencia extranjera del Departamento de Estado o como parte del proceso interinstitucional liderado por el Consejo de Seguridad Nacional”.⁵⁹

Desde la puesta en marcha del enfoque interinstitucional, el Comando Sur mira de manera más amplia a la región, en donde la mayoría de los problemas transnacionales, ya sean económicos, policiales o sociales y políticos, se perciben cada vez más como amenazas a la seguridad nacional de EE.UU. El Secretario Robert Gates elogió al comandante del Comando Sur en ese momento, almirante Stavridis, por haber modificado la cultura del comando en favor de otra que responde mejor a estas preocupaciones. “Cuando asumió su cargo hace tres años, [Stavridis] entendía que la combinación de desafíos de seguridad que enfrenta esta región—narcotráfico, corrupción, pandillas, secuestros y mucho más—no se presta en sí misma a soluciones militares como tradicionalmente se ha entendido y practicado. Con este fin [Stavridis] no solamente ha rediseñado la organización de este comando, sino que ha reformado esencialmente su cultura institucional y su manera de operar”.⁶⁰ En vez de reforzar el principio de excluir a los militares de asuntos que no requieren una solución militar, el Secretario Gates aprobó que se adoptasen responsabilidades que corresponderían mejor a agencias civiles.

Otro ejemplo de esta extralimitación interinstitucional tiene que ver con las pandillas. Las pandillas en América Latina, especialmente en América Central, son un problema continuo y creciente de seguridad pública. Pero la respuesta adecuada debe ser una respuesta comunitaria exhaustiva que incluya la acción policial, y no una

solución militar. Sin embargo, recientemente, en diciembre de 2009, durante una visita a la sede del Comando Sur, los miembros de una delegación de derechos humanos recibieron unas tarjetas que indicaban las prioridades del comando. La amenaza de las pandillas latinoamericanas figuraba como la prioridad número dos del comando.

El deseo de coordinación interinstitucional en el campo de la seguridad nacional no es nuevo. De la Ley de Seguridad Nacional de 1947 y la Ley Goldwater Nichols de 1986 pasando por la creación de Grupos de Coordinación Interagencial Conjunta dentro de los comandos de combate, hasta la nueva plantilla para los comandos regionales como “Comandos de Seguridad Interagencial Conjuntos”, la intención de que todos los organismos trabajen juntos sigue siendo un objetivo merecedor.

Cuando el esquema interagencial pone a los militares a la cabeza y a los civiles como adjuntos, el mensaje a los organismos civiles no es claro sobre quién es—o quién debería ser—él encargado.

No obstante, cuando el esquema interagencial pone a los militares a la cabeza y a los civiles como adjuntos, con el grueso de los recursos gestionados por el comando militar de combate, el mensaje a los organismos civiles no es claro sobre quién es—o quién debería ser—él encargado. Si otros comandos regionales adoptan el modelo del Comando Sur, con demasiada frecuencia la tarea de coordinación y toma de decisiones corresponderá a la organización que haya quedado a la cabeza de la estructura organizacional, la cual tiene los recursos y el personal para realizar el trabajo. Si se impusiera el concepto de Comando de Seguridad Interagencial Conjunto y sus presupuestos, serán los militares quienes quedarán al frente, ya sean los más adecuados o no.

Al cierre de esta edición, nos hemos enterado que el Comando Sur ha abandonado, al menos temporalmente, la nueva estructura de Comando de Seguridad Interagencial, reemplazando la “junta directiva” interagencial con la tradicional estructura “J-1, J-2, J-3” que poseía antes de la reforma, y que aun poseen la mayoría de los otros comandos regionales. Evidentemente, el esfuerzo de rescate en Haití, la Operación de Respuesta Unificada, se vio

entorpecido por la confusión que se produjo sobre donde las “juntas directivas” debían acoplarse a otras unidades militares.

El General William Fraser, el jefe del Comando Sur, ha dicho que aun no está claro cuando el Comando Sur retomará el nuevo modelo, pero un portavoz afirmó que el comando aun tiene la intención de continuar procediendo hacia una plataforma interagencial.⁶¹ Esperamos que un estudio sobre el nuevo modelo interagencial a cargo de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental que será publicado en julio de 2010, proporcione una visión más clara. Ciertamente nos continúa preocupando que la organización interagencial con la mayor cantidad de recursos—los militares—sea la que domine la agenda.

Rescate y alivio tras el terremoto en Haití

En respuesta a la peor catástrofe natural que ha golpeado a nuestro hemisferio en la historia moderna, el presidente Obama designó a la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) como la responsable de coordinar los esfuerzos estadounidenses de ayuda para los damnificados en Haití. Sin embargo, dada la magnitud de este desastre, que destruyó puertos, carreteras y la infraestructura necesaria para distribuir la ayuda, los militares de EE.UU. terminaron desempeñando un papel predominante en las semanas inmediatamente posteriores al terremoto.

Liderados por el Comando Sur de EE.UU., la dedicación de 13 mil efectivos militares contribuyó a facilitar la búsqueda y rescate, así como la distribución de alimentos, agua y suministros a millones de haitianos. De especial importancia fue el buque hospital *USNS Comfort*, uno de los pocos servicios que prestó asistencia médica en los días inmediatamente posteriores a la catástrofe. A la luz de las enormes pérdidas sufridas por el gobierno de Haití y por la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), el papel de los militares de EE.UU. resultó ser crucial en el suministro de rescate y asistencia. La recién creada Fuerza de Tarea Conjunta de EE.UU. y Haití sigue trabajando junto a otras organizaciones locales e internacionales.

El rol de los militares no estuvo exento de controversia. Un punto de conflicto en las primeras etapas de las actividades de rescate fueron las decisiones respecto al aterrizaje de aviones que

prestaban socorro y atención médica. Como las fuerzas militares de EE.UU. controlaban de hecho el acceso al aeropuerto de Puerto Príncipe, Médicos sin Fronteras y otras organizaciones se quejaron porque a muchos aviones con suministros y personal médico se les denegaba el aterrizaje. Mientras tanto, se les permitía aterrizar a las aeronaves que llegaban para desarrollar misiones relacionadas con la seguridad, restándole prioridad a la ayuda médica y humanitaria de las agencias civiles.

A medida que la recuperación de Haití se vaya fortaleciendo, es importante que la asistencia militar, que fue necesaria en la primera etapa de alivio, sea progresivamente reemplazada por el control y la dirección civil. De acuerdo con los principios sobre la prestación de ayuda emitidos por la coalición de agencias de ayuda humanitaria conocida como *InterAction*, “Los militares de EE.UU. deberían, por regla general, utilizarse en operaciones de socorro como último recurso, en situaciones que requieren una respuesta extraordinariamente rápida o una gran capacidad de transporte aéreo. La respuesta militar debe limitarse en alcance geográfico y programático, y debe ser siempre en apoyo de los organismos civiles”.⁶²

Al momento de enviar esta publicación a la imprenta, cientos de miles de haitianos aun no tienen las necesidades más básicas de comida, agua, salud y vivienda, aseguradas. Es esencial que el gobierno de Estados Unidos cumpla eficientemente con la entrega de asistencia inmediata y con el compromiso hacia esfuerzos de reconstrucción de largo plazo, que sean sustentables, descentralizados, y aun más importante, liderados por los propios haitianos.

Recomendaciones: Restablecimiento de la relación EE.UU.-América Latina

El gobierno de Obama debe superar el difícil primer año para reconstruir la confianza de la región en nuestro país. Pero debe ganarse no sólo la confianza de los gobiernos de la región sino también la confianza de su gente. Los pasos más importantes que puede tomar para restablecer la relación con la región son los siguientes:

- **Cumplir con la reconstrucción de Haití.** El gobierno de EE.UU. debe proporcionar una asistencia generosa y sostenida, encabezada por los haitianos (con la participación tanto del gobierno como de la sociedad civil), efectiva,

ecológicamente sostenible, descentralizada, dirigida por civiles, y transparente.

- **Redireccionar decididamente la asistencia otorgada al gasto militar hacia las necesidades de la gente.** Hace falta, desde hace mucho tiempo, un cambio más drástico en las prioridades de la asistencia de nuestro país, que este orientada hacia operaciones de rescate y reconstrucción, ayuda humanitaria para los refugiados, salud y educación, apoyo al Estado de derecho y a los derechos humanos, y al desarrollo en pequeña escala—ayuda que mejora la vida de la gente. El perfil de los Estados Unidos en la región no debe estar dominado por el gasto militar.

El gobierno de Obama debe superar el difícil primer año para reconstruir la confianza de la región en nuestro país. Pero debe ganarse no sólo la confianza de los gobiernos de la región sino también la confianza de su gente.

- **Defender los derechos humanos, incluso con nuestros aliados más cercanos.** Los abusos de derechos humanos en toda la región son una preocupación grave, pero el problema adquiere una nueva dimensión cuando las fuerzas de seguridad reciben ayuda sustancial por parte de EE.UU. Los Estados Unidos deben presionar a Colombia y a México para poner fin a la impunidad por violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, y debe hacer esto a través de la aplicación con mayor rigor de los requisitos de derechos humanos establecidos en la ley. Se debería desarrollar un plan de acción de derechos humanos para Colombia que involucre a todos los organismos pertinentes del gobierno de los EE.UU. y que respalde visiblemente a los defensores de derechos humanos.

- **Demostrar voluntad para cambiar la política antinarcóticos con hechos y palabras, y escuchar a nuestros socios.** Un primer paso pequeño es que el Congreso apruebe la reducción de las fumigaciones aéreas en Colombia y del equipamiento militar para México incluido en el presupuesto para 2011. Pero el esfuerzo para reducir funciones militares inadecuadas y

fortalecer la capacidad de las instituciones civiles en los esfuerzos antinarcóticos debería ser mayor así como también lo debería ser la propia contribución de los Estados Unidos hacia la violencia relacionada con las drogas. En lugar de imponer un modelo cuyos resultados contra el narcotráfico y la producción de drogas han sido decepcionantes, la administración debería dar a los gobiernos latinoamericanos más libertad para forjar su propio camino. El gobierno de EE.UU. debe hacer su parte incrementando sustancialmente el acceso a tratamiento contra las drogas en los Estados Unidos y tomando medidas para controlar el flujo de armas de asalto hacia México.

- **Apoyar los derechos humanos y la rendición de cuentas en Honduras.** El gobierno de Estados Unidos debe continuar con la suspensión de la asistencia militar y condicionar toda otra asistencia, y debe abstenerse de apoyar la readmisión de Honduras a la OEA hasta que se tomen verdaderos pasos para: investigar y juzgar los abusos de derechos humanos; establecer la rendición de cuentas por el golpe; tomar medidas para proteger a los defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, miembros de la comunidad LGBT y otros que estén en peligro; remover a los militares de roles inadecuados; y establecer un diálogo sustantivo e inclusivo a lo largo y ancho de Honduras para construir una sociedad justa y democrática. El gobierno de EE.UU. debe ser explícito respecto a las violaciones a los derechos humanos y respecto a la urgencia de traer a los responsables ante la justicia.
- **Tranquilizar a los gobiernos de América Latina y al público sobre las intenciones militares de EE.UU.** La decisión de firmar un acuerdo de cooperación para la defensa entre Colombia y EE.UU. fue un golpe duro a la mejora de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, y lo mejor sería anularlo. Mientras tanto, Estados Unidos podría traer tranquilidad a América Latina asegurándole a los países de la región que no está tratando de proyectar su poder militar en el hemisferio. Debería realizar esto a través de una política de transparencia en lo relacionado con este acuerdo y otros acuerdos militares, con la garantía de que el actor principal y la voz en la política de EE.UU. para la región es el Departamento de Estado y las embajadas, y no el Comando Sur. Esto significa que hay que definir las limitaciones y las potestades en el acuerdo con Colombia para que quede claro que éste no implica el apoyo irrestricto a Colombia en la guerra interna ni que EE.UU. utilizará el territorio colombiano para atacar a sus vecinos. Asimismo, el acuerdo debería definir con mayor precisión lo que Washington considera como circunstancial dentro de la ambigua rúbrica de “amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”. El gobierno de EE.UU. podría también firmar acuerdos de cooperación para la defensa con los gobiernos fronterizos a Colombia, haciendo constar que EE.UU. no va a tratar de entrar en su territorio o espacio aéreo sin autorización expresa de las autoridades civiles. La supervisión del Congreso debe fortalecerse con la presentación de informes periódicos sobre la presencia y actividades del personal estadounidense en las instalaciones de Colombia.
- **Apoyar los esfuerzos de América Latina que adoptan un enfoque más amplio hacia la seguridad ciudadana.** La preocupación por la delincuencia, incluyendo el crimen organizado y las actividades de pandillas, dominan la opinión pública en varios países. Puesto que los ciudadanos demandan a sus gobiernos mayor protección, los Estados Unidos podrían ayudar pero sólo mediante el reconocimiento de que el uso de los ejércitos o la adopción de tácticas de mano dura de la policía no funcionan. La protección a los ciudadanos requiere de una reforma y de medidas contra la corrupción de la policía; un sistema judicial que funcione bien, de manera segura y adecuada tecnológicamente; un control efectivo por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación; y programas específicos para incrementar las oportunidades para los jóvenes.
- **Estimular la diplomacia y la negociación.** No es del interés de EE.UU. en la actualidad que las malas relaciones entre Colombia y Venezuela terminen en un conflicto armado. A EE.UU. tampoco le interesa que Colombia enfrente una nueva década de guerra sin fin con las FARC y el ELN. La administración debe trabajar con todos los gobiernos y organizaciones internacionales pertinentes para reducir las tensiones y capitalizar las oportunidades para el diálogo.
- **Permitir el libre intercambio de personas e ideas con Cuba.** Nada podría restablecer mejor las relaciones con la región como el fin

total de la arcaica restricción a los viajes a la isla caribeña. La ampliación de los acuerdos diplomáticos sobre una serie de cuestiones (migración, medio ambiente, preparación para desastres, interdicción de drogas, correo directo, y una multitud de otros intereses comunes) es también una manera de reducir las tensiones, lo que permitiría avanzar hacia un mayor relacionamiento con Cuba.

- **Poner la reforma a la inmigración de nuevo en la agenda política** y avanzar con esto. La construcción de puentes en vez de muros, por medio de la creación de un proceso para que los indocumentados obtengan un estatus legal y eventualmente la ciudadanía, defendiendo la unidad familiar como una prioridad en nuestra política de inmigración, ayudaría inconmensurablemente a las familias y economías de EE.UU. y de América Latina y mejoraría la imagen de EE.UU. en la región.

Fuentes

- 1 "Palabras de Obama en la apertura de la Cumbre de las Américas", *Fox News* 17 de abril, 2009 <<http://www.foxnews.com/politics/2009/04/17/obamas-opening-remarks-summit-americas/>>.
- 2 "¿De Manta a Palanquero?" *Revista Cambio* 6 de junio, 2008 <http://www.cambio.com.co/portadacambio/779/ARTICULO-PRINTER_FRIENDLY-PRINTER_FRIENDLY_CAMBIO-4234729.html>.
- 3 Véase, por ejemplo, Carlos Noriega, "Una Manta para Alan García," *Página 12* 31 de marzo, 2007 <<http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-82567-2007-03-31.html>>.
- 4 "¿De Manta a Palanquero?"
- 5 "Los enviados del Pentágono," *Revista Cambio* 2 de julio, 2009 <http://www.cambio.com.co/portadacambio/835/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5569679.html>.
- 6 "Expeditionary Warfare" Base Agreement Defies Court and International Pleas," *Fellowship of Reconciliation Colombia Program* <<http://www.forcolombia.org/baseagreementPR>>.
- 7 "Acuerdo militar que le permitirá a E.U. usar 7 bases en Colombia no está cerrado," *El Tiempo*, 11 de marzo, 2010 <http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7355508.html>.
- 8 Véase, "Ya estábamos en seis de las siete bases"; afirma William Brownfield, embajador de E.U. en Colombia," *El Tiempo* 1 de noviembre, 2009 <http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ya-estabamos-en-seis-de-las-siete-bases-afirma-william-brownfield-embajador-de-eu-en-colombia_6488647-1>.
- 9 "Yankees Welcome," *Revista Semana* 31 de octubre 2009 <<http://www.semana.com/noticias-nacion/yankees-welcome/130763.aspx>>.
- 10 Estados Unidos, Departamento de la Fuerza Aérea, "Military Construction Program: Fiscal Year (FY) 2010 Budget Estimates" (Washington: U.S. Air Force, 2009) <<http://www.justf.org/files/primarydocs/091104pa.pdf>>.
- 11 Gobierno de Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores, "Declaración Conjunta y Acuerdos: Reunión Presidencial de Brasilia," Comunicado de prensa, *Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto* 18 de noviembre, 2009 <<http://www.mrecic.gov.ar/portal/prensa/comunicado.php?buscar=4091>>.
- 12 Paul Mena Erazo, "Unasur acepta garantías de Colombia y EE.UU.," *BBC Mundo* 28 de noviembre, 2009 <http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/11/091127_0043_unasur_quito_jg.shtml>.
- 13 Alan Gragg, "Navy Reestablishes U.S. 4th Fleet," comunicado de prensa, *Navy.mil: Official Website of the United States Navy* 24 de abril, 2008 <http://www.navy.mil/search/display.asp?story_id=36606>.
- 14 Jim Stavridis, "US Fourth Fleet – One Partner in the Security and Stability of the Americas," *In the Americas, Southcom Commander's Blog* 20 de enero, 2009 <<http://www.southcom.mil/AppsSC/Blog.php?id=36>>.
- 15 Stavridis, "US Fourth Fleet."
- 16 "Obama empezó a enviar señales sobre lo que será su política hacia América Latina," *Revista Cambio* 27 Mar. 2009 <http://www.cambio.com.co/mundocambio/820/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4885823.html>.
- 17 Kevin Casas, "Obama y América Latina, un año después," *Página Quince, Nacion.com* 29 de enero 2010 <http://www.nacion.com/In_ee/2010/enero/29/opinion2242687.html>.
- 18 "La estrella de Obama se desvanece en A. Latina," Editorial, *El Mercurio* blog, 30 de noviembre 2009 <<http://blogs.elmercurio.com/editorial/2009/11/30/la-estrella-de-obama-se-desvan.asp>>.
- 19 Citado en, "IV Flota Naval preocupa a Brasil," *El Universo*, 11 de agosto, 2009, <http://www.eluniverso.com/2009/08/11/1/1355/6B6C612CAF1F43DD80F58E7956A365FA.html>.
- 20 Khatchik DerGhougassian, "The Good Sailor Policy: The Return of the US Fourth Fleet and the South American Reaction," *Harvard International Review* <<http://hir.harvard.edu/index.php?page=article&id=1817>>.
- 21 "Russian Navy Sails to Venezuela," *BBC News* 22 de septiembre, 2008 <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/7628899.stm>>.
- 22 "President Obama and President Alvaro Uribe Velez of Colombia Speak about the Relationship between the United States and Colombia," Transcripción, *The Washington Post, CQ* Transcripciones por cable, 29 de junio, 2009 <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/06/29/AR2009062903080_pf.html>.
- 23 Véase por ejemplo, Amnistía Internacional-EEUU, y Fellowship of Reconciliation, *Assisting Units that Commit Extrajudicial Killings: A Call to Investigate US Military Policy toward Colombia* (Washington: Amnesty International-USA and FOR, Mayo de 2008) <<http://www.forcolombia.org/CalltoInvestigate>>; y Fellowship of Reconciliation, *Undoing the Damage Done: Colombian Army Killings and US Assistance* (California: FOR, Febrero de 2009) <<http://www.forcolombia.org/sites/www.forcolombia.org/files/memo4C0ndeb09.pdf>>.
- 24 Fundar, Centro Prodh, & Tlachinollan, "Obama administration's alleged release of Merida Initiative funds: A violation of U.S. law that will encourage serious human rights violations in Mexico," Agosto de 2009 <http://www.pdfdownload.org/pdf2html/view_online.php?url=http%3A%2F%2Fwww.nonprofitsoapbox.com%2Fstorage%2Fdocuments%2F090824_joint_statement_merida_initiative_prodh_fundar_tlachinollan.pdf>.
- 25 Ginger Thompson and Marc Lacey, "Mexico Drug Fight Fuels Complaints," *The Washington Post* 18 de agosto, 2009, <http://www.nytimes.com/2009/08/19/world/americas/19mexico.html?_r=3&scp=2&sq=mexico&st=cse>.
- 26 Toda la información sobre la ayuda en esta sección proviene de diversas fuentes gubernamentales de EE.UU. citadas en la página web de *Just the Facts*: www.justf.org
- 27 Véase, "Grant U.S. Aid Listed By Program, Counter-Narcotics Programs, Entire Region, 1996-2011," *Just the Facts* <http://justf.org/All_Grants_Program?year1=1996&year2=2011&funding=Counter-Narcotics+Programs&subregion=Entire+Region&x=63&y=6>.
- 28 "Steep decline in coca bush cultivation in Colombia as Peru and Bolivia see increase," *United Nations Office on Drugs and Crime* 19 de junio, 2009 <<http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2009/June/coca-survey-report-for-colombia-peru-and-bolivia.html>>.
- 29 "Estamos cambiando nuestra estrategia," *El Espectador* 25 de marzo, 2010 <<http://www.elespectador.com/impreso/internacional/articuloimpreso195130-estamos-cambiando-nuestra-estrategia-brownfield>>.
- 30 De Fuerza Interagencial de Tareas Conjuntas del Sur, citado en "Assessing U.S. Drug Policy in the Americas, Mark Schneider: Testimonio de Mark L. Schneider, Senior Vicepresidente del International Crisis Group, ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, 15 de octubre, 2009," *International Crisis Group* <<http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6353>>.
- 31 Comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia, "Drogas y democracia: Hacia un cambio de paradigma" (Comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia, Febrero de 2009) http://www.drogasedemocracia.org/Arquivos/livro_espanhol_04.pdf

- ³² Véase Coletta A. Youngers y John M. Walsh, "Drug Decriminalization: A Trend Takes Shape," *Americas Quarterly* (Otoño 2009) <<http://www.americasquarterly.org/node/978>> y "Factbox: Drug policy reforms in Latin America," *Reuters* 10 de enero, 2010 <<http://www.reuters.com/article/idUSTRE60S4MJ20100129>>.
- ³³ Mary Beth Sheridan, "Clinton: U.S. Drug Policies Failed, Fueled Mexico's Drug War," *The Washington Post* 26 de marzo, 2009 <<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/25/AR2009032501034.html>>.
- ³⁴ Gary Fields, "White House Czar Calls for End to 'War on Drugs,'" *The Wall Street Journal* 14 de mayo, 2009 <<http://online.wsj.com/article/SB124225891527617397.html>>.
- ³⁵ H.R. 2134, Western Hemisphere Drug Policy Commission Act of 2009. <<http://www.thomas.gov/cgi-bin/bdquery/z?d111:h.r.02134>>.
- ³⁶ *Congressional Record* 28 de abril, 2009: E992-E993 <<http://www.thomas.gov/cgi-bin/query/z?r111:E28AP9-0010>>.
- ³⁷ Para más información sobre la CSDI, véase USAID, "USAID/Colombia Strategic Briefing" (Washington: FedBizOpps.gov, 2009) <https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&tab=core&id=e0506f6baedf0f1e8edabf853b8b12d6&_cview=0&cck=1&u=&ck=>>.
- ³⁸ Para ver una lista de opiniones a este respecto, véase el subtítulo "Praise for the Concept" en Adam Isacson y Abigail Poe, *After Plan Colombia* (Washington: Center for International Policy, Diciembre, 2009) <<http://justf.org/content/after-plan-colombia>>.
- ³⁹ "Colombia bases row fuels arms race," *United Press International* 2 de septiembre, 2009 <http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2009/09/02/Colombia-bases-row-fuels-arms-race/UPI-80401251906121/>.
- ⁴⁰ Juan Paullier, "Carrera armamentista sudamericana," *BBC Mundo* 10 de agosto, 2009 <http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/08/090807_carrerarmamentista_sudamerica_jp.shtml>.
- ⁴¹ *Ibidem*.
- ⁴² *Ibidem*.
- ⁴³ Argentina y Uruguay son dos excepciones importantes en esta tendencia regional.
- ⁴⁴ Jorge Battaglino, "Palabras mortales. ¿Rearme y carrera armamentista en América del Sur?," *Nueva Sociedad* 215 (Mayo-Junio 2008): 23.
- ⁴⁵ 18 U.S.C. § 1385.
- ⁴⁶ 10 U.S.C. Chapter 18
- ⁴⁷ Department of Defense Directive 5525.5
- ⁴⁸ *Ibidem*, E4.1.3.
- ⁴⁹ H.R. 5122, the John Warner National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2007.
- ⁵⁰ H.R. 4986, National Defense Authorization Act of 2008.
- ⁵¹ Declaración del general Victor E. Renuart, JR., USAF, Comandante del Comando Norte de EE.UU. y del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica ante el Comité de Servicios Armados del Senado, 17 de marzo, 2009 <<http://armed-services.senate.gov/statemnt/2009/March/Renuart%2003-17-09.pdf>>.
- ⁵² *Ibidem*.
- ⁵³ *Ibidem*.
- ⁵⁴ Audiencias conjuntas de la Cámara de Representantes y el Senado, "The Role of the Military in Drug Interdiction," SHRG 100-878, Mayo, Junio, 1988, p. 287.
- ⁵⁵ 10 U.S.C § 124.
- ⁵⁶ Véase la página web del Comando Norte para una discusión sobre sus opiniones sobre la Ley de Posse Comitatus en, http://www.northcom.mil/About/history_education/posse.html.
- ⁵⁷ Oficina del Inspector General, "Report of Inspection: The Bureau of African Affairs," OIG Report No. ISP-I-09-63 (Washington: U.S. Department of State, Agosto, 2009): 14.
- ⁵⁸ Congreso de los Estados Unidos, Comité de Servicios Armados de la Cámara, *Report 110-652 on H.R. 5658, the 2009 National Defense Authorization Act* (Washington: GPO, 16 de mayo, 2008) <http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_reports&docid=f:hr652.110>.
- ⁵⁹ *Ibidem*.
- ⁶⁰ Robert Gates, "U.S. Southcom Change of Command," Speech, *U.S. Department of Defense* 25 de junio 2009 <<http://www.defense.gov/Speeches/Speech.aspx?SpeechID=1363>>.
- ⁶¹ Entrevista telefónica con Bruce A. Cheadle, Subdirector Adjunto para Integración, USSOUTHCOM, 29 de marzo, 2010.
- ⁶² InterAction, "The U.S. Military's Expanding Role in Foreign Assistance," *2008 Foreign Assistance Briefing Book* (Washington: InterAction, noviembre 2008) <<http://www.interaction.org/foreign-assistance-briefing-book>>.

Para más información acerca de la asistencia militar a América Latina y el Caribe, incluyendo una base de datos sobre toda la ayuda de EE.UU. a la región, véase el sitio web de CIP/LAWGEF/WOLA: www.justf.org

Esta publicación contó con el apoyo económico de la Fundación Promote Open Society, de la Fundación Open Society Institute, de la Fundación Ford y de la Fundación Arca.

Traducción: Amira Armenta.

© 2010 por el Centro para las Políticas Internacionales, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos, y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Latin America Working Group Education Fund

424 C Street NE
Washington, DC 20002
202.546.7010
www.lawg.org

Center for International Policy

1717 Massachusetts Ave NW, Suite 801
Washington, DC 20036
202.232.3317
www.ciponline.org

Washington Office on Latin America

1666 Connecticut Ave NW, Suite 400
Washington, DC 20009
202.797.2171
www.wola.org